

Marco V. Sánchez  
Pablo Sauma, coordinadores

# Vulnerabilidad económica externa, protección social y pobreza en América Latina



De la presente edición:  
© CEPAL Naciones Unidas, 2011  
© FLACSO, 2011

**CEPAL**

Av. Dag Hammarskjöld 3477  
Vitacura, Santiago de Chile  
Teléfonos: (56-2) 471-2000 / 210-2000 / 208-5051  
Fax: (56-2) 208-0252  
Casilla 179-D, Santiago de Chile  
Código Postal: 7630412  
[www.eclac.org](http://www.eclac.org)

**Departamento de Asuntos Económicos  
y Sociales de las Naciones Unidas (UN/DESA)**

United Nations Headquarters  
New York, New York, 10017  
U.S.A.  
Teléfono (1-212) 963-1234  
[www.un.org/desa](http://www.un.org/desa)

**FLACSO, Sede Ecuador**

La Pradera E7-174 y Diego de Almagro  
Quito-Ecuador  
Teléfono.: (593-2) 323-8888  
Fax: (593-2) 323-7960  
[www.flacso.org.ec](http://www.flacso.org.ec)

ISBN:

Cuidado de la edición: Verónica Vacas  
Diseño de portada e interiores: Antonio Mena  
Imprenta: Rispergraf  
Quito, Ecuador

---

"Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la CEPAL, UN/ DESA y FLACSO"

# Índice

Prólogo .....	7
Presentación .....	9
Introducción .....	13
Choques externos, política económica y protección social .....	23
<i>Pablo Sauma</i>	
Efectividad y viabilidad de la política pública frente a los choques externos: un análisis mediante simulaciones .....	79
<i>Martín Cicowiez y Marco V. Sánchez</i>	
Bolivia .....	159
<i>Gustavo Canavire-Bacarreza y Mirna Mariscal</i>	
Colombia .....	209
<i>Jairo Núñez y Néstor González</i>	
Costa Rica .....	263
<i>Marco V. Sánchez y Pablo Sauma</i>	
Ecuador .....	317
<i>Juan Ponce, Sebastián Burgos y José Antonio Sánchez</i>	

<b>Guatemala</b> .....	351
<i>Maynor Cabrera y Manuel Delgado</i>	
<b>México</b> .....	401
<i>Marco Antonio del Río, Diana Manuel e Israel Islas</i>	
<b>Nicaragua</b> .....	459
<i>Oscar Gámez, Erick Cerpas, Luz E. Sequeira, Octavio Zeledón y Leonel Pérez</i>	
<b>Sobre los autores</b> .....	503

# Bolivia

Gustavo Canavire-Bacarreza  
y Mirna Mariscal\*

## Introducción

Los cambios recientes en el entorno económico internacional, principalmente la crisis económica mundial, el resurgimiento de la inflación en la región, la variabilidad en el precio del petróleo, la fluctuación del dólar y el euro, y las políticas económicas adoptadas por otros países han tenido efectos importantes en la economía boliviana. También ha habido fluctuaciones en los ingresos por la venta de gas a Argentina y Brasil. En respuesta, se ha aplicado una política monetaria contractiva con implicaciones sobre la apreciación de la moneda nacional, medidas para el control de la inflación interna –principalmente del sector alimentos– y se han adoptado algunas disposiciones relacionadas con el comercio exterior para evitar el desajuste de los precios relativos de bienes transables y no transables.

La década de los noventa se caracterizó por una estabilidad económica, que se mantuvo a pesar de la presencia de numerosos choques externos e internos. A nivel externo, los precios mundiales de las materias primas fluctuaron, y los términos de intercambio se deterioraron, hubo crisis financieras y los flujos de capital fueron volátiles. A nivel interno, los fenó-

---

\* Georgia State University y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), respectivamente. Los autores agradecen los comentarios y la colaboración de Viviane Bastos, Viviana Caro, Martín Cicowiez, Marco V. Sánchez, Pablo Sauma y Wilson Jiménez en la calibración del modelo EGC con datos de Bolivia, y el desarrollo del presente documento. Asimismo, agradecen la asistencia de Susana Lizárraga, Fernando Ríos y Carlos Sevillano.

menos climatológicos, fundamentalmente el de El Niño, ocasionaron desastres y pérdidas, y la turbulencia política, especialmente desde fines de la década anterior, derivó en conflictos sociales que debilitaron la gestión pública y generaron incertidumbre para las inversiones en sectores estratégicos. Todo esto definió el contexto en el que inició el nuevo milenio.

El crecimiento económico boliviano está asociado al desarrollo de la actividad extractiva (gas y minerales), aun cuando en la última década se observa una mayor diversificación de la oferta exportable, con mayores ventas de manufacturas y productos agroindustriales (Rodríguez y Caro, 2007). La volatilidad de la actividad económica en Bolivia fue relativamente baja en las últimas dos décadas, pero se observan menores tasas de inversión en sectores intensivos en mano de obra que han mermado la creación de empleos. Asimismo, los choques externos e internos derivaron en restricciones fiscales, al reducir las fuentes sostenibles de financiamiento de las políticas sociales y de protección de la población, y su magnitud e intensidad se constituyen en determinantes significativos de la vulnerabilidad y las fluctuaciones de los ingresos familiares.

Para un análisis más exhaustivo de la situación de riesgos y vulnerabilidad que enfrenta la población, en este capítulo se evalúan las características y los potenciales impactos de los principales choques externos que han afectado a la economía boliviana, principalmente en un contexto de crisis internacional, así como las principales políticas públicas de protección social implementadas. En particular, se busca responder las siguientes preguntas: ¿cuáles fueron los principales choques externos que afectaron a la economía boliviana? ¿Cuáles fueron las principales políticas macroeconómicas en Bolivia? ¿Cuáles son las principales fuentes de vulnerabilidad de la economía boliviana?

La segunda sección describe los principales choques externos de la economía, así como los determinantes de las fluctuaciones económicas que fueron relevantes para explicar los cambios en los niveles de bienestar de la población. La tercera indaga la evolución de los indicadores del mercado de trabajo y su relación con los choques externos. Seguidamente, en la cuarta, se examinan la pobreza, la vulnerabilidad de la población y las políticas de protección social. La quinta sección presenta los resultados de simulaciones realizadas con base en el modelo de equilibrio general com-

putable, MACEPES, mediante los cuales se evalúan los principales choques macroeconómicos y algunas alternativas de política pública y protección social. Finalmente, la sección sexta presenta conclusiones y recomendaciones de política.

### Principales choques de política económica y externos

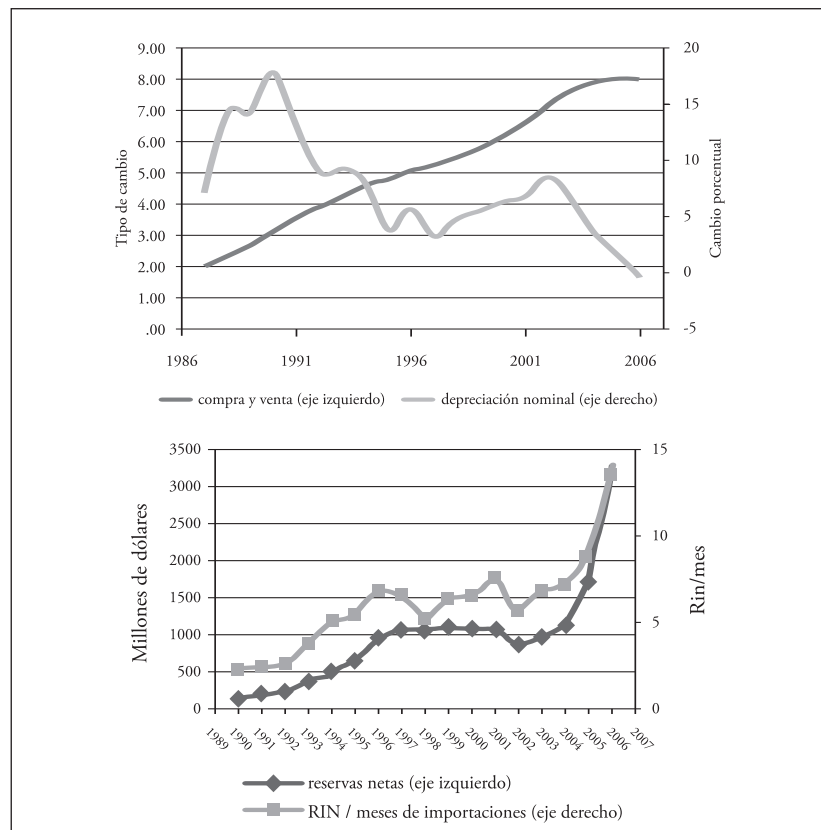
Las principales políticas macroeconómicas se analizan para el período 1990-2006. Esas se asocian con el entorno internacional y nacional, así como con los choques que afectan el desempeño económico general y sectorial.

#### *Las medidas de estabilización 1990-1995*

Los ciclos de corto plazo mostraron la vulnerabilidad de la economía boliviana, pero la aplicación de una política monetaria restrictiva y la desaceleración de la depreciación del tipo de cambio posibilitaron reducir la inflación a niveles controlables, pasando de 18% en 1990 a 8,5% en 1994. En 1990, se registró un saldo positivo en la cuenta corriente, 2% del PIB, y se observó un incremento en el flujo de capitales hacia el país, de tal forma que las reservas netas internacionales (RIN) alcanzaron 7,5% del PIB en 1995 (ver Gráfico N.º 1). La política monetaria estuvo acorde al crecimiento económico, al igual que las emisiones monetarias y las metas inflacionarias. Se observó una mayor confianza de los agentes económicos en el sistema financiero, y los depósitos globales pasaron de 17,9% del PIB en 1990 a 37,5% del PIB en 1995 (UDAPE, 2007).

Gráfico N.º 1

Bolivia: Tipo de cambio nominal, depreciación nominal y reservas internacionales netas



Fuente: BCB (Banco Central de Bolivia) / UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas)

En el ámbito externo, se profundizó la política de promoción de exportaciones, posibilitando duplicar el valor de las mismas, US\$ 1 124,2 millones en 1995. También, continuaron las negociaciones de deuda externa en el Club de París, reduciéndose sus niveles a 66,7% del PIB en 1995 (ver Cuadro N.º 1). La política arancelaria, a través del establecimiento de un arancel único y uniforme, y la eliminación de barreras arancelarias a las importaciones, permitió mejorar las recaudaciones aduaneras, abaste-

cer el mercado interno y tener un mayor control sobre el nivel de precios domésticos. Los fenómenos climatológicos continuaron impactando en la economía: El Niño disminuyó el producto en 1,6 puntos porcentuales en 1992 (Barragán y Coronado, 1998), año en que la producción agropecuaria cayó en 4,2%, y, por la caída de precios internacionales, se presentaron choques de demanda, que resultaron en una caída de las exportaciones; mientras, las importaciones se elevaron, afectando el saldo de la balanza comercial. Sin embargo, paralelamente se dinamizaba la industria manufacturera, a través de la incursión de Bolivia en el APTA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas). Entre 1990 y 1995, además, se emitió una serie de leyes<sup>1</sup> que encaminaron las reformas y representaron un cambio en el diseño del Estado.

Con el propósito de fortalecer el rol público en el área social y promover el crecimiento económico de largo plazo, se creó el Fondo de Inversión Social (FIS), entidad que posibilitó mejorar la gestión de la inversión pública en el área social. Asimismo, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia de la educación, se inició la Reforma Educativa, que, a través de la implementación de una serie de políticas en el área, posibilitó incrementar las tasas de cobertura escolar y de matriculación, además del número de unidades educativas, y otorgar una mayor capacitación a los docentes.

En promedio, en este período, la economía creció 4,1% por año y se redujo la inflación. Aunque el déficit fiscal se redujo a 4% del PIB (de casi 6% del PIB en el quinquenio anterior), el financiamiento externo permaneció invariable (3,6% del PIB). La cuenta corriente fue deficitaria, mientras que la cuenta capital registró un saldo positivo, por el incremento de la inversión extranjera directa (IED), que alcanzó casi dos puntos porcentuales del PIB. Un aspecto relevante es la caída de la deuda externa, como resultado de las renegociaciones de recompra de la deuda comercial realizadas con bancos internacionales.

1 Ley de hidrocarburos (1990), Inversiones (1992), Privatización (1992), Exportaciones (1993), Capitalización (1994), Sistema de Regulación (1994), Ley de Participación Popular (1994) y Ley de Descentralización Administrativa (1995).

Cuadro N.º 1

Bolivia: principales variables macroeconómicas (1985-2007) (promedios por período)

	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2006-2007
<b>Sector real</b>				
Crecimiento del PIB (%)	4,1	3,4	3,0	4,6
Crecimiento del PIB per cápita	1,8	1,2	0,6	2,5
Inflación anual (%)	12,2	6,4	3,4	4,9
Devaluación (%)	8,9	5,3	5,0	-0,6
<b>Sector fiscal</b>				
Ingreso total (% del PIB)	32,2	31,7	30,2	40,9
Ingresos tributarios (% del PIB)	9	15,7	18,2	17,3
Egreso total (% del PIB)	36,2	32,5	31,7	31,2
Egresos de capital (% del PIB)	8,9	7,5	8,6	9,2
Balance fiscal (% del PIB)	-4,0	-3,1	-5,9	5,8
Financiamiento total (% del PIB)	4,0	3,1	5,9	-5,8
Financiamiento interno (% del PIB)	0,4	0,5	2,1	-6,2
Financiamiento externo (% del PIB)	3,6	2,6	3,8	0,4
<b>Sector externo</b>				
Balance de la cuenta corriente (% del PIB)	-3,7	-5,9	-0,4	12,5
Balanza comercial (% del PIB)	-3,9	-7,5	6,6	9,9
Exportaciones (% del PIB)	14,6	14,4	20,2	36,4
Importaciones (% del PIB)	-18,5	-21,9	-13,6	-26,5
Inversión extranjera directa (% del PIB)	2,5	8,8	4,4	2,2
Remesas netas del exterior (% del PIB)	0,4	0,6	1,4	5,8
Deuda externa (% del PIB)	72,2	59,0	55,5	33,1
<b>Inversión</b>				
Total (% del PIB)	15,2	18,6	14,5	15,7
Pública (% del PIB)	8,9	6,8	5,5	8,3
Privada (% del PIB)	6,3	11,8	9,0	7,4

Fuente: UDAPE.

*Reformas estructurales: 1995-2000*

Las reformas de inicios de la década de los noventa sentaron las bases para la capitalización y privatización de empresas estatales. La IED –incluyendo la construcción del gasoducto al Brasil en 1998– pasó de US\$ 66 millones en 1990 a US\$ 832 millones en 2000. La descentralización administrativa impulsó, a su vez, la descongestión de los servicios de educación y salud. Se cambió el sistema de pensiones de uno de reparto al de capitalización individual, con el consiguiente impacto fiscal (4% y 5% del PIB), se limitó la capacidad de endeudamiento de las instituciones regionales, y se hizo un seguimiento presupuestario a las entidades estatales para controlar el déficit público.

El crecimiento de la economía en este período fue de 3,9% anual, pero tuvo fluctuaciones significativas. La inflación bajó a un dígito (7%) y la depreciación cambiaria fue más lenta (4,7%). Como resultado de las reformas, los ingresos tributarios aumentaron y, junto a la austeridad fiscal, posibilitaron la reducción del déficit a 3% del PIB, en promedio anual. Asimismo, la implementación de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) permitió reducir el coeficiente de endeudamiento total hasta 74% del PIB; aunque la deuda externa continuó presentado niveles insostenibles<sup>2</sup>.

El elevado grado de dolarización del sistema financiero, el subdesarrollo de los mercados de capital y el programa de estabilización de la época pasada posibilitaron que Bolivia no experimentara una recesión como consecuencia del “efecto tequila” (Requena et al., 2000). Sin embargo, la crisis del sudeste asiático sí fue sentida, poniendo de manifiesto, nuevamente, la vulnerabilidad de la economía boliviana ante la caída de los precios internacionales. En 1999, las actividades extractivas (minera y de hidrocarburos) sufrieron caídas de más del 6%, debido a la contracción de la demanda externa, la finalización del contrato de venta de gas a Argentina y el retraso de la exportación de este producto a Brasil. Paralelamente, la erradicación de los cultivos de coca y la reforma de aduanas provocaron

2 Según la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la deuda externa es insostenible cuando supera el 50% del PIB.



una fuerte disminución de los ingresos del sector informal<sup>3</sup> (UDAPE, 2005). De la misma manera, fueron sentidos nuevamente los efectos del fenómeno climatológico de El Niño, que provocó una caída del producto cercana a los dos puntos porcentuales en 1999, año en que la tasa de crecimiento del PIB fue de 0,43%, lo que determinó un aumento sustancial del desempleo abierto y la reducción de los ingresos laborales (Landa, 2005).

Con el propósito de dinamizar la demanda interna, estimular la producción y mejorar la competitividad, el Gobierno aplicó un “Programa de reactivación económica” (PRE), basado en la reprogramación de créditos al sector productivo, y la reducción y exención de impuestos. Adicionalmente, se implementaron proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra, y se aceleraron los programas de construcción y mantenimiento de infraestructura básica, especialmente de carreteras.

#### *Crisis política y aumento de las exportaciones: 2000-2005*

Desde el año 2000, la economía boliviana enfrentó choques externos bajo un contexto de creciente debilidad institucional, aspecto que acentuó la vulnerabilidad. Hasta 2002, la profundización de la desaceleración económica mundial incidió negativamente en la economía boliviana. Reflejada nuevamente en la caída de precios internacionales, la crisis derivó en un bajo desempeño de los sectores extractivo y agrícola industrial. Entre 2000 y 2003 se observa una marcada desaceleración del crecimiento, una caída persistente de los términos de intercambio y un menor flujo de entrada de capitales. Esta situación se profundizó por una aguda crisis institucional y por la inestabilidad política, que derivaron en conflictos sociales, determinando la sucesión constitucional del Gobierno. Las demandas sociales y regionales obligaron a incrementar el gasto público, de manera que el déficit, en promedio, fue del 7,9% del PIB en 2003, for-

3 La economía de la coca redujo su participación de 3,9% del PIB en 1997 a solo 0,4% en 2000. Se estima que cada dólar de la economía de la coca genera otro dólar adicional en el resto de la economía. Debido a dicho vínculo productivo, hubo una disminución de alrededor de 59 000 empleos directos e indirectos en esos años.

zando un mayor endeudamiento, especialmente externo. En 2002, gracias a la ampliación de la HIPC, la deuda externa se redujo a 55,5% del PIB, posibilitando que los recursos aliviados se pudieran destinar a financiar programas de lucha contra la pobreza en el marco de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP).

La alta concentración de las exportaciones de Bolivia de productos básicos demuestra la vulnerabilidad de la economía frente a cambios de precios internacionales. A partir de 2003, se observa una recuperación en el crecimiento impulsada por la demanda externa, producto de la mejora de precios internacionales. El mismo año, el sector agropecuario, después de 12 años, presentó una tasa de crecimiento elevada (8,7%), la producción manufacturera se reforzó con el acuerdo ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act), el sector de hidrocarburos fue mucho más dinámico y la minería continuó su recuperación. Las exportaciones crecieron y las importaciones se contrajeron, hecho que provocó una inflexión en el comportamiento del saldo en cuenta corriente.

Entre 2003 y 2005, la economía creció, en promedio, un 3,8%, y las exportaciones representaron cerca del 26% del PIB. La contracción de la IED provocó una reducción del nivel de importaciones, lo que derivó en un superávit de la balanza comercial y de cuenta corriente, este último apoyado en la disminución del pago de servicio de deuda externa y el incremento de las remesas de trabajadores del exterior. Como resultado de una mayor eficiencia en las recaudaciones y la aplicación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a mediados de 2005, los ingresos tributarios crecieron, hasta alcanzar un promedio de 21% del PIB, con lo cual se redujo el déficit fiscal a 2,3% del PIB en 2005. Asimismo, se observó, de manera general, una recuperación de la demanda interna con crecimientos del consumo privado y de la inversión. Los altos precios de los hidrocarburos y minerales a nivel mundial incidieron en las exportaciones, y ello, aunado a la expansión de la demanda interna, influyó favorablemente en el crecimiento.

*La economía boliviana desde 2006*

En 2006, el nuevo Gobierno anunció cambios en la política económica e implementó el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con medidas que buscan impulsar el crecimiento, a través de una mayor participación del Estado en la producción. A mediados del año, el Estado intervino el sector hidrocarburos y decidió ampliar su participación en las rentas del gas. En el ámbito financiero, dentro de la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM), Bolivia pudo obtener una nueva condonación de su deuda externa, de manera que esta última alcanzó el 17,3% del PIB en 2006. En el período 2006-2008, se advierte un contexto externo e interno mucho más favorable, incluyendo una expansión del consumo privado a una tasa de 4,6%, tomando en cuenta que este se había contraído en años anteriores. Las remesas provenientes del exterior y el incremento en los precios mundiales de los principales productos de exportación, a nivel externo, y a nivel interno una mayor actividad económica en los sectores intensivos en el uso de mano de obra una política fiscal orientada a mejorar la distribución de las rentas del gas, y el otorgamiento de transferencias a la población –como el “Bono Juancito Pinto” y la “Renta dignidad”, a los que se hará referencia más adelante– posibilitaron que la economía boliviana creciera a una tasa promedio de 5,2%. Ello ocurrió a pesar de los impactos sucesivos de fenómenos climatológicos como El Niño y La Niña.

En el sector fiscal, las políticas implementadas, principalmente el IDH, posibilitaron el aumento de la recaudación tributaria, de 25,1% del PIB en 2005 a 28,5% en 2008. Esto coadyuvó a que el Gobierno pudiera ejecutar algunas políticas de redistribución del ingreso –como las ya mencionadas– y a mejorar el salario mínimo, que pasó de Bs 440 en 2005 a Bs 647 en 2009 –es decir, un incremento nominal de 47%–. Asimismo, la inversión pública se expandió gracias a la recuperación, por parte del Estado, de las empresas públicas, pasando de representar 6,9% del PIB en 2005 a 9,4% en 2008.

A pesar del incremento en el gasto público, en 2007 y 2008 se registraron superávit fiscales de 1,7% y 3,2% del PIB, respectivamente. Contrariamente a la desaceleración de la economía mundial a mediados de 2008, el auge de los precios de las materias primas perseveró, y por medio

del efecto en las exportaciones –que crecieron en un 429% entre 2003 y 2008, lo cual se reflejó incluso en superávit en la cuenta corriente–, la economía boliviana continuó mostrando un crecimiento sostenido. También influyeron, en el crecimiento, un mayor flujo de remesas de trabajadores y un menor pago del servicio de la deuda externa. Esta bonanza económica se reflejó en un aumento de las reservas internacionales.

El cambio político se expresó en la nacionalización del sector de hidrocarburos, que contribuyó a los buenos resultados fiscales, y también en la ejecución de una nueva política social, basada en transferencias monetarias directas a los grupos más vulnerables. Sin embargo, hubo presiones inflacionarias provenientes de las restricciones de oferta que provocó el fenómeno climatológico El Niño, lo cual influyó negativamente en el crecimiento del producto en más de un punto porcentual. Adicionalmente, el alza mundial de los precios de los alimentos y los energéticos provocó una mayor inflación importada. Es así que se registraron tasas de inflación del 12% durante 2007 y 2008, contrastando ampliamente con el crecimiento de estos años.

*Descomposición de los choques externos a partir de la cuenta corriente*

A continuación se examina la incidencia que han tenido los choques externos desde la perspectiva de la cuenta corriente<sup>4</sup>. Durante el período 1990-2007, se observan incrementos en el déficit de cuenta corriente en los primeros años (6% anual, en promedio), mientras que en los últimos diez años este se reduce en un 10% anual, en promedio. El incremento inicial se debió al deterioro de los términos de intercambio en 1990-1995, y luego al gasto doméstico durante 1995-2000. Durante este último período, la ligera mejora en los términos de intercambio ayudó a aminorar los choques externos negativos sobre la cuenta corriente (ver Cuadro N.º 2). Posteriormente, durante 2000-2005 hubo una reducción del déficit impulsada (en un 80%) por la mejora en los términos de intercambio, que resultó principalmente del efecto de los precios de las importaciones y la

4 La metodología utilizada se basa en Balassa (1981), Ávila y Bacha (1987), y FitzGerald y Salmat (1997).

reducción del comercio internacional. Durante los últimos dos años, la mejora en la cuenta corriente se hizo más evidente. Entre el período que comprende los años 2000-2005 y 2005-2007, el déficit de cuenta corriente se redujo en 11,84% del PIB, como resultado de la mejora en los términos de intercambio (2,93%), la reducción en la deuda (0,57%), choques de demanda de importaciones y exportaciones, y la condonación de deuda externa en los últimos tres años.

Dada la crisis internacional que se inició en 2008, que repercutió en la caída del petróleo y los minerales que exporta Bolivia, se espera un deterioro en la cuenta corriente para el año 2009, aunque no muy significativo.

#### *Efectos de los choques externos, internos y de política*

Los choques externos, internos y de política han tenido una gravitación importante en la economía boliviana. Debe recordarse que en la década de los años ochenta, el país vivió una situación muy complicada, con una fuerte crisis económica e hiperinflación, lo que se refleja en las magnitudes del Cuadro N.º 2. Si bien las políticas aplicadas hacia el final de esa década lograron estabilizar la economía, no pudieron sentar las bases para un crecimiento sostenido en el tiempo; más bien, la recuperación económica en esos años fue lenta, el desempleo elevado y se notó la ausencia de ingresos en diversos grupos de la población. Las políticas de compensación, adoptadas a través de la creación de fondos sociales de emergencia, posibilitaron impulsar la inversión pública y crear empleos temporales, pero no lograron restituir completamente el ingreso de los hogares.

En la década siguiente se observa una menor volatilidad y un nivel más alto de crecimiento promedio en relación a varios países de América Latina. Las reformas económicas posibilitaron mejorar la recaudación fiscal y tener, también, un mayor control sobre el nivel de precios domésticos. Sin embargo, la reforma de pensiones tuvo un impacto negativo en las cuentas fiscales, aspecto que aún constituye un problema presupuestario, al tener un costo cercano a cuatro puntos porcentuales del PIB. La política de promoción de exportaciones tuvo un impacto positivo en los primeros años de su ejecución; sin embargo, no fue sostenida, de manera que el balance externo fue

siempre negativo, excepto en 1992. Los flujos de capitales, así como la IED que ingresó a la economía a mediados de la década, estuvieron ligados a la capitalización de las empresas públicas y a su programa obligatorio de inversiones. Luego de este proceso, y en coincidencia con los conflictos político-sociales de 2003, la IED comenzó a descender con efectos en el crecimiento.

Cuadro N.º 2

Bolivia: descomposición del cambio del déficit en la cuenta corriente (cambio porcentual)

Hasta :	1975-1980	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2007
Desde :	1970-1975	1975-1980	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005
<b>Incremento en el déficit observado</b>	3,75	-11,58	9,91	3,92	1,20	-9,89	-11,84
<b>Choques externos</b>	1,07	185,93	-2,12	8,02	-5,15	-8,38	-2,93
Deterioro de los términos de intercambio	1,77	-10,90	7,30	10,22	-0,46	-3,92	-4,60
Efecto precio de las importaciones	2,36	-6,38	-0,25	3,99	-2,11	-0,92	2,66
Efecto precio de las exportaciones	-0,59	-4,52	7,55	6,23	1,65	-3,00	-7,26
Choque de tasa de interés	1,40	200,79	-2,40	0,64	0,10	-0,26	5,91
Retardación del comercio mundial	-2,10	-3,97	-7,02	-2,84	-4,79	-4,19	-4,25
<b>Otras variables externas</b>	1,00	-0,48	381,46	-3,88	-1,50	-0,75	-7,01
Carga de la acumulación de deuda	0,09	-2,58	382,83	-0,34	-0,46	-0,05	-0,57
Cambio en el ingreso de inversión directa	1,93	2,39	0,27	-2,34	-0,66	1,40	-4,18
Cambio en las remesas	-0,06	0,00	-0,01	-0,01	-0,86	-1,54	-3,96

(Continúa...)

Cambio en las transferencias públicas	-0,95	-0,28	-1,62	-1,18	0,48	-0,56	1,69
<b>Acciones de política doméstica</b>	1,51	-0,57	9,56	-1,46	7,18	0,01	1,67
Gasto doméstico	0,64	-1,07	1,34	-0,38	0,72	-1,53	-0,47
Contracción del consumo	0,31	0,47	0,99	-0,92	-0,46	-0,05	-0,66
Consumo privado	-0,30	0,08	1,50	-0,67	-0,38	-0,11	-0,57
Consumo público	0,61	0,39	-0,51	-0,25	-0,09	0,07	-0,09
Reducción en la inversión	0,33	-1,54	0,35	0,54	1,18	-1,48	0,19
Tasa de comercio	0,86	0,50	8,22	-1,08	6,47	1,54	2,14
Reemplazo de las exportaciones	-4,03	-3,49	4,51	1,35	2,64	1,65	3,28
Penetración de las exportaciones	4,90	3,99	3,71	-2,44	3,83	-0,11	-1,14
<b>Efectos de interacción</b>	0,17	-196,46	-378,99	1,24	0,66	-0,77	-3,57
Choques de importaciones	-0,39	1,20	0,27	0,15	-0,19	-0,09	0,21
Demanda / Unidad de exportación	-0,05	0,36	0,34	-0,09	0,01	-0,04	-0,11
Desplazo / Precio	-0,34	0,84	-0,07	0,24	-0,20	-0,05	0,31
Choques de exportaciones	0,44	0,74	1,52	1,20	0,88	-0,69	-1,64
Demanda / Unidad de exportaciones	0,33	0,03	2,49	0,54	1,18	-0,67	-1,34
Penetración / Precio	0,10	0,71	-0,97	0,65	-0,30	-0,02	-0,30
Choques de deuda	0,12	-198,41	-380,78	-0,11	-0,02	0,01	-2,14
<i>Stock</i> / Intereses	0,12	-198,41	-380,78	-0,11	-0,02	0,01	-2,14

Fuente: Estimación propia con base en información de UDAPE.

La alta dependencia del crecimiento en las exportaciones de materias primas ha sido el primer elemento de vulnerabilidad de la economía. Sin embargo, también han sido importantes los factores climatológicos y los conflictos sociales, que por limitaciones metodológicas no serán abordados en este capítulo. Los fenómenos climatológicos como El Niño y La Niña impactaron sobremanera el crecimiento, incrementaron el desempleo abierto, disminuyeron los ingresos laborales y tuvieron repercusiones en la inflación, mediante el incremento de los precios de los productos agropecuarios. Asimismo, los conflictos sociales y la debilidad institucional producto de ellos acentuaron la vulnerabilidad del país.

Las políticas económicas han tratado de responder a los choques externos; no obstante, el ciclo político y la orientación de los gobiernos, con regularidad, han impedido reaccionar oportuna y adecuadamente ante las amenazas y riesgos que ha enfrentado la economía. Si bien se ha establecido una serie de medidas de política económica y social, estas no han podido reducir la vulnerabilidad, crear mecanismos de apoyo a la estabilidad, ni generar condiciones para la inversión, la acumulación y el crecimiento.

### El mercado de trabajo: 1996-2006

Las diferentes etapas de crecimiento en los últimos años, que han estado acompañadas de choques externos e internos, también han afectado el mercado laboral. La tasa de desempleo abierto disminuyó en los años noventa, cuando se registró el mayor crecimiento relativo del PIB, y se incrementó entre 2000 y 2006, en medio de la desaceleración económica fruto, en parte, de choques externos. Estos resultados, sin embargo, no reflejan el grado en que los cambios en el crecimiento económico han estado asociados con la creación de empleos (Jiménez, 2008).

La evolución de las tasas de participación y desempleo abierto estuvo determinada por las fluctuaciones de la actividad económica. En este sentido, se destacan principalmente cuatro aspectos. Primero, la reducción del crecimiento económico en 1999 (0,4%), vinculada fuertemente con la caída en los precios internacionales de materias primas, generó una pérdida de puestos de trabajo, haciendo que, a nivel nacional, se duplicara el

desempleo abierto, aunque el impacto estuvo concentrado en el área urbana –predominantemente no agrícola–. Segundo, las bajas tasas de crecimiento económico entre los años 2000 y 2003 (2,5% en promedio) incidieron en las altas tasas de desempleo abierto y mayores tasas de participación, reflejando la necesidad de la población de buscar trabajo y una creciente dificultad en encontrarlo. Tercero, ambas tasas se redujeron con la leve recuperación del crecimiento económico en 2002. Y cuarto, a pesar de un crecimiento más elevado en 2005-2006 (alrededor de 4%), como resultado del aumento de las exportaciones, los efectos de El Niño en 2006 derivaron en el aumento de las tasas de participación global, mientras que el desempleo se mantuvo constante.

La tendencia creciente del desempleo abierto se explicó principalmente por la elevación de la cesantía, acorde con la desaceleración de la economía que determinó menores tasas de creación de puestos de trabajo. En 1996, la cesantía era de 2,4% y se elevó hasta 5,3% en 2006 (UDAPE, 2008). La desaceleración de la economía en 1999 propició una entrada masiva al mercado de trabajo de adolescentes y jóvenes con baja calificación y escasa experiencia, que promovió una mayor movilidad ocupacional. La dinámica del mercado laboral muestra un incremento en la generación de empleos. Entre los años 1996 y 2006 el empleo en el sector transporte y comunicaciones creció en un 8% por año, y mostró un crecimiento de 6,9% y 4,4% anual en los servicios financieros y el sector manufacturero, respectivamente. Datos de las encuestas de hogares muestran que el único sector que ha experimentado un decrecimiento en su capacidad de generar empleo es el de servicios básicos (electricidad, agua y gas).

Cabe anotar que el mercado laboral (agregado a nivel nacional), es predominantemente agrícola, y se caracteriza por bajos ingresos laborales, alta informalidad y un elevado nivel de indigenismo y ruralidad. En el año 2006, el sector agropecuario concentró el 40% de la población ocupada, tendencia que, si bien se ha visto reducida durante los últimos diez años, no ha sido mayormente afectada por factores externos. Esta concentración del empleo se refleja en la proporción de trabajadores no calificados (o con más de ocho años de escolaridad), que es poco más de la mitad, quienes, por sus características, son más vulnerables a los choques externos. Mientras que 55% de los trabajadores hombres son no calificados, esta

proporción sobrepasa el 60% en el caso de las mujeres. La brecha en el empleo por género es incluso superior a nivel nacional: 55,1% de los trabajadores son hombres y 44,9% son mujeres; aspecto que no ha variado en los últimos diez años.

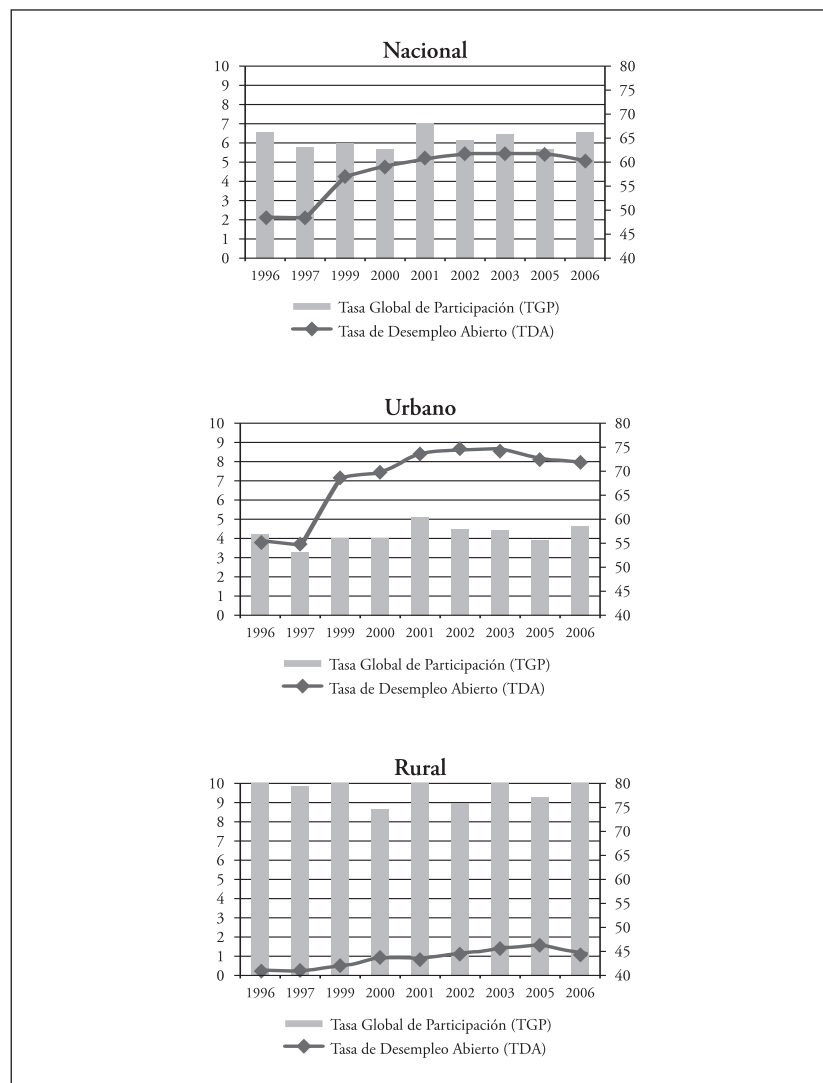
#### *Tendencias del mercado de trabajo en el área urbana*

Pareciera que el mercado laboral urbano reacciona de manera más significativa frente a los choques externos e internos de la economía, así como frente a la aplicación de diferentes políticas que han afectado la estructura del mercado laboral. Las diferencias por características individuales de la fuerza laboral se exacerbaban con la ocurrencia de choques externos. En 1996, por ejemplo, el desempleo femenino (en el área urbana) fue similar al observado entre los varones, pero esta situación se modificó con la desaceleración económica y afectó principalmente a las mujeres, quienes desde 1999 han mostrado tasas de desempleo al menos dos puntos porcentuales por encima de las que presentaron los varones. Para el año 2006 el desempleo femenino superaba al masculino por más de cuatro puntos porcentuales.

Asimismo, mientras el desempleo permaneció estable en el quintil de ingresos familiares per cápita más ricos, el de la población más pobre se ha incrementado con la desaceleración económica. En 1996 el desempleo de la población con mayores ingresos significaba algo más de la mitad del desempleo del grupo de población más pobre. En 2006, en cambio, el desempleo de los más ricos representó más de la mitad del desempleo del quintil más pobre.

Adicionalmente, en los últimos diez años tanto la tasa bruta de participación como la tasa global de participación han aumentado, reflejando un incremento general de la fuerza laboral (ver Gráfico N.º 2). Por otro lado, la tasa de ocupación también se ha incrementado, pero no en la misma proporción que el crecimiento de la fuerza laboral.

Gráfico N.º 2  
Bolivia: tasa de participación global y tasa de desempleo abierto



Fuente: UDAPE.

La tasa de desempleo abierto muestra una disminución en la década de los noventa, y a partir del año 2000 vuelve a crecer (Gráfico N.º 2), siendo el período 2001-2003 uno de los peores en términos de desempleo. A partir de 2005 se observa un relativo descenso en esta tasa.

De acuerdo a estimaciones realizadas por UDAPE (2006), desde fines de la década de los años noventa existió una disminución del tiempo de búsqueda de empleo para los nuevos entrantes. Esto muestra una mayor movilidad ocupacional en el mercado de trabajo urbano que, aunada a la alta informalidad, pone en evidencia que ha habido un ligero deterioro de las condiciones de trabajo.

Adicionalmente, el ingreso promedio se encuentra muy por encima del salario mínimo establecido por ley y no presenta una correlación con el tipo de choques que acontecieron en los años noventa. De acuerdo con Jiménez (2008), un aspecto sobresaliente es el grado de extrema vulnerabilidad en el que se encuentran los trabajadores en Bolivia. Por ejemplo, 75% de los ocupados no tiene acceso a un seguro de salud (público o privado) y 80% no contribuye a un fondo de pensiones. Solo 20% de los ocupados está afiliado a un sindicato o gremio.

#### *Indicadores del mercado laboral en el área rural*

Los cambios recientes en el mercado de trabajo rural se evidencian en los indicadores de participación y desempleo. Las tasas de desempleo abierto son más bajas en el área rural, tanto por la débil demanda de empleo asalariado en el sector agropecuario, como por la escasez de mano de obra, habida cuenta de que se intensificó la migración desde el campo en los últimos años. Durante el período de análisis se advirtieron mayores tasas de desempleo rural a raíz de la búsqueda de trabajo en mercados laborales urbanos (Gráfico N.º 2).

En las últimas dos décadas, la ocupación en el área rural creció a una tasa anual de 1,3%, esto es, 3,5 puntos porcentuales menos que en el área urbana. A pesar de que la contribución de las actividades económicas rurales al empleo total ha declinado debido a la modernización productiva, una proporción importante de la población percibe ingresos en el área

rural. Precisamente, los ingresos de los trabajadores rurales son los que muestran más vulnerabilidad en períodos de choque. Sin embargo, si bien el sector agrícola es uno de los más sensibles a choques climáticos, las cifras oficiales no muestran grandes variaciones, lo cual indica la poca flexibilidad del mercado laboral rural. De acuerdo con estimaciones a partir de las encuestas a hogares, los ingresos de los trabajadores rurales agrícolas se redujeron en aproximadamente 8% en los años en que el fenómeno de El Niño afectó la agricultura.

Ha habido un ligero cambio en la estructura del mercado laboral en Bolivia. La PEA agropecuaria rural está disminuyendo lentamente con respecto a la PEA agropecuaria total: de 95% en 1996-2000 a 90% en 2001-2006. En el mismo lapso, el sector agrícola pasó de concentrar al 85% de los trabajadores rurales, a aproximadamente el 81% de ellos. Este fenómeno está asociado con la expansión de la población urbana que se ocupa en actividades agropecuarias, sea como trabajadores asalariados en ocupaciones temporales o como propietarios de explotaciones agropecuarias. Según la información disponible, la cantidad de población rural ocupada en actividades no agropecuarias ha aumentado entre 1996 y 2006; de hecho, para el año 2006, un 14% de la PEA rural se dedica a actividades no agropecuarias como el comercio, la industria manufacturera, el sector público, actividades de enseñanza y construcción. El sector de la construcción, aunque pequeño en tamaño, es quizás el que más dinamismo ha presentado en el área rural.

El crecimiento sostenido de sectores no agropecuarios es una clara muestra de la “urbanización” del área rural. Estos sectores, además, poseen poca flexibilidad para responder a los choques.

### *Informalidad*<sup>5</sup>

Desde hace más de una década, el mercado de trabajo informal<sup>6</sup> se ha convertido en uno de los sectores más importantes y dinámicos de la eco-

5 La presente sección se basa en el trabajo de UDAPE (2007).

6 De acuerdo con OIT (2002), se define el sector informal “[...] como el conjunto de unidades económicas de pequeña escala dedicadas a actividades de producción y distribución de bienes y

nomía boliviana. No solo ha abarcado prácticamente todas las ramas de actividad económica sino que ha proporcionado más empleo que el sector formal, a pesar de ser bastante vulnerable ante choques externos.

La informalidad en Bolivia es un fenómeno predominantemente urbano. Si bien ha existido una reducción en sus niveles, esta continúa siendo uno de los principales problemas que presenta el mercado de trabajo. De hecho, 73,3% de los ocupados a nivel nacional era informal en 2006. Durante los períodos de mayor crecimiento del PIB, la informalidad ha sido menor. Por el contrario, en los años de recesión económica (1999-2003), cuando se registran tasas de crecimiento del PIB per cápita menores a 1%, los niveles de desempleo abierto y el porcentaje de población ocupada en el sector informal han aumentado. Entre 1996 y 2006, período en el cual se observan choques de tipo climático, así como variaciones en los precios de los principales productos primarios, la población ocupada en el sector informal pasó de 63% a 58,1% (UDAPE, 2007).

Al igual que el sector formal, la población ocupada en el sector informal está compuesta principalmente por ocupados de sexo masculino (68%). Se aprecia una significativa presencia de mujeres ocupadas en el sector doméstico —donde más del 80% de trabajadores corresponde a mujeres—. Asimismo, el sector informal absorbe el doble de personas con educación primaria incompleta (40,6%), en comparación con el sector formal (20%). Para personas con educación primaria completa o secundaria incompleta, el principal sector empleador es el informal. Esta situación se revierte en casos de tener educación a partir de la secundaria completa, lo que permite advertir la valoración de la educación en el sector formal. Del total de la población ocupada en el sector formal, 41,4% cuenta con educación superior como nivel educativo, mientras en el sector informal solo 13,5% de los ocupados tiene este nivel.

Del porcentaje total de trabajadores que cambian de empleo, una mayor parte (12%) lo hace desde el sector formal hacia el sector informal, y una menor (6%) desde el sector informal hacia el sector formal (6%). El cierre de empresas y la caída en la actividad económica, a raíz de la crisis

servicios cuya relación capital-trabajo es débil, y se caracterizan por ser precarias y vulnerables a las condiciones económicas [...] y por operar con bajos niveles de rentabilidad y tecnología obsoleta”.

económica y política experimentada en el país en los últimos años, pueden haber ocasionado una fuga de trabajadores formales hacia el sector informal como principal mecanismo de subsistencia. La información disponible, proveniente de las encuestas a hogares, no permite establecer una matriz de tendencias en relación a la movilidad.

UDAPE (2007) también muestra que la informalidad se ha concentrado en las actividades de comercio (42%), industria (17%) y transporte (11%), donde se encuentran mayormente trabajadores por cuenta propia (55%) y trabajadores familiares (15%). De igual forma, se observan disparidades en la participación de trabajadores en el sector informal: 63% de mujeres, 69% de indígenas y 73% posee bajos niveles de educación, a partir de lo cual se podría establecer el perfil del trabajador con mayor probabilidad de ser informal.

Finalmente, la informalidad es bastante alta en el área rural, aunque se ha ido reduciendo ligeramente durante los últimos diez años. Durante el período 1996-2000, la proporción de trabajadores rurales en el sector informal alcanzó un 93%, mientras que en el período 2001-2006 se redujo tres puntos porcentuales. Asimismo, los ingresos laborales de los trabajadores rurales informales crecieron un 23% durante el período 1996-2000, y solamente 13% en el siguiente período.

### El sistema de protección social

Esta sección presenta un análisis de la estructura de los sistemas de protección social y de las acciones orientadas a responder a eventos adversos. A objeto de contextualizar la protección social, primero se describe la evolución e incidencia de la desigualdad y la pobreza; también se establecen los vínculos entre el gasto en protección social y el desempeño de la economía; y finalmente se evalúa la flexibilidad de la política de protección social frente a los choques macroeconómicos.

### *Pobreza, desigualdad y vulnerabilidad*

Diversos estudios coinciden en señalar que Bolivia presenta uno de los más altos índices de incidencia de la pobreza en América Latina<sup>7</sup>. En 2006, la pobreza moderada alcanzaba a casi 60% de la población, mientras que la pobreza extrema se acercaba a 38% (ver Gráfico N.º 3). La elevada magnitud de la pobreza se relaciona con la estructura social, tiene raíces históricas y es consecuencia de un patrón de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales que impidió generar y mantener un crecimiento económico sostenido. En los últimos cincuenta años, el PIB per cápita apenas superó el crecimiento demográfico y las barreras al crecimiento se expresaron en un severo déficit de inversión, bajas tasas de acumulación de capital humano y un elevado grado de heterogeneidad productiva.

Desde mediados de la década pasada, la pobreza extrema tuvo fluctuaciones atribuidas al impacto de las políticas económicas y los choques externos. En 1999, la desaceleración de la economía y el menor ritmo de actividad en sectores intensivos en mano de obra se reflejaron en un deterioro de los ingresos familiares de una parte importante de la población.

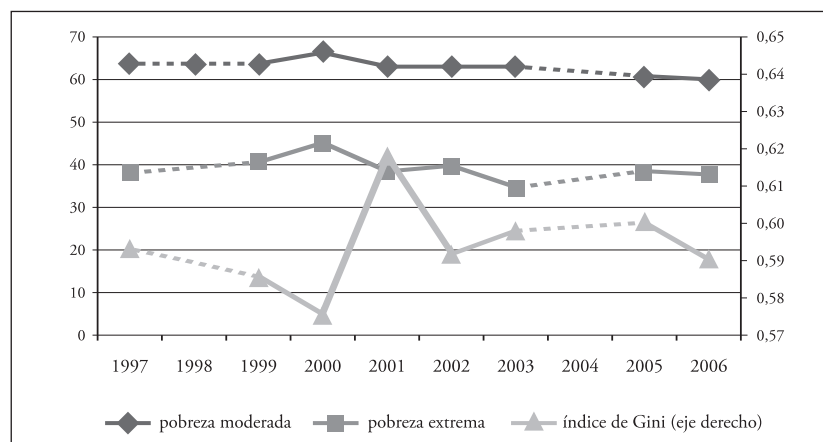
En las áreas urbanas, la incidencia de la pobreza moderada fluctuó alrededor de 53%, mientras que en el área rural este indicador presentó mayores variaciones, con un promedio de 80%. La pobreza rural se ha visto alterada por la elevada dependencia de las actividades agropecuarias que han sido afectadas por eventos climáticos, pérdidas de la superficie de cultivos, ganado y deterioro de la infraestructura productiva.

Los altos niveles de pobreza son consecuencia, entre otras razones, de la gran desigualdad en la distribución del ingreso que presenta Bolivia. Datos para los últimos años confirman que los niveles en el país han superado incluso a Brasil —que tradicionalmente tiene una de las economías con mayor desigualdad en el planeta—. Las encuestas de hogares muestran que en 2006 el coeficiente de Gini a nivel nacional se encontraba en 0,59, con 0,05 puntos de más para las áreas rurales (UDAPE, 2007).

<sup>7</sup> Véase, por ejemplo, CEPAL (2006) y Banco Mundial (2005).



Gráfico N.º 3  
Bolivia: incidencia de pobreza moderada y pobreza extrema



Fuente: Encuestas a Hogares – INE.

Asimismo, la evidencia empírica<sup>8</sup> muestra que los episodios de incrementos en la desigualdad en Bolivia son resultado de períodos de crisis, muchas veces asociados a diferentes choques externos. En el período 1999-2001, que se caracterizó por la caída de los precios de las principales exportaciones, el índice de Gini subió aproximadamente 9% (Landa, 2004), luego de reducirse durante el período de entrada de capitales al país (1996-1999).

La variabilidad de los ingresos familiares incide en el riesgo de abandono escolar de los niños en edad escolar primaria. Aun cuando las tasas de cobertura neta en primaria se acercan al 93% en el año 2006, la tasa de término bruta al octavo de primaria es de 75,6%, debido a problemas de entrada tardía, abandono y repetición. Asimismo, las posibilidades de seguir estudiando para las personas de entre 15 y 24 años de edad también se reducen cuando los riesgos afectan los ingresos familiares, lo que los obliga a dejar definitivamente la formación educativa que, como se indicó, es ampliamente valorada en el sector formal del mercado de trabajo.

La población adulta en Bolivia –con entre 25 y 64 años de edad– presenta un promedio de 7,4 años de educación aprobados, mientras que

8 Véase Landa (2004), Yáñez (2004), y Jiménez y Lizárraga (2004).

58% trabaja en empleos informales. La baja educación y la inserción ocupacional precaria generan altos niveles de inseguridad, especialmente en hogares de bajos ingresos, y los hace vulnerables a los choques externos. Finalmente, cabe resaltar que el sistema previsional estimó que algo más de 846 000 personas están afiliadas a los fondos de pensiones y un 26% tiene cobertura de seguro social de corto plazo (datos del año 2002).

### *Las políticas de protección social hasta 2006*

Si bien distintas iniciativas y estrategias nacionales<sup>9</sup> han reconocido los severos problemas de exclusión, vulnerabilidad y pobreza extrema que afectan a varios grupos de la población, las acciones para la protección social en las dos últimas décadas han sido desarticuladas y no han tenido mecanismos de focalización y protección para atender a poblaciones en extrema pobreza y a los sectores más vulnerables.

En la década de los años ochenta e inicios de la siguiente, el sistema de seguridad social para empleados estables y los fondos de vivienda social eran las únicas intervenciones de protección a los trabajadores. En este marco se encuentran los llamados *fondos sociales*, siendo el Fondo Social de Emergencia de Bolivia (FSE), creado en 1986, la experiencia pionera, que después se generalizó en otros países. Sin embargo, el sistema de seguridad social no contemplaba los componentes contributivos y la asistencia social, focalizados en prestaciones a los más pobres (Loza, 2007). Entre 1991 y 1997 se impulsó el “Programa nacional de atención a la niñez” (PIDI), a fin de enfatizar en la nutrición y la estimulación temprana de los niños y niñas (menores a 6 años). Se trató de un programa novedoso, pero tuvo una cobertura limitada y sus elevados costos generaron severos problemas de financiamiento. Este programa se reformó en 1997, con el objetivo de garantizar la promoción de servicios de educación inicial, salud y protección en todo el territorio, creándose el “Programa nacional de atención a niños y niñas menores de 6 años” (PAN).

9 Estrategia Social Boliviana (1989-1999), Estrategia de Desarrollo Económico y Social (1995) y Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y Diálogo Nacional (2001).

Desde mediados de la década de los noventa, Bolivia comenzó a organizar mejor el sistema de protección social, aunque sin una directiva clara. Se emprendieron acciones orientadas a la protección social en tres áreas: i) programas de empleo de emergencia, ii) aseguramiento público gratuito en salud, y iii) transferencias no contributivas.

En 2001 y hasta el año 2006 se implementó el Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE), con el propósito de generar empleos de carácter temporal (alrededor de 14 meses) para aminorar las pérdidas de ingresos de los hogares pobres que resultaron de la desaceleración económica y el aumento del desempleo entre 1999 y 2001. En el año 2006 se inició la implementación del “Programa de lucha contra la pobreza y apoyo a la inversión social” (PROPAIS), que sustituyó al PLANE, con intervenciones orientadas a la inversión en pequeñas obras de infraestructura social, la formación de la mano de obra en algunas especialidades, y mejoras del conocimiento y la experiencia para facilitar la reinserción en el mercado de trabajo.

Además de estas intervenciones, el antiguo seguro básico de salud había sido sustituido por el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) en el año 2003. Adicionalmente, se implementó el “Programa de extensión de las coberturas en salud” (EXTENSA) y el Seguro Médico Gratuito de Vejez, en el mismo año.

Las transferencias no contributivas estuvieron inicialmente respaldadas por el “Bono solidario” (Bonosol), implementado en 1997. Este consistía en una anualidad vitalicia para los bolivianos que al 31 de diciembre de 1995 tenían una edad igual o superior a 21 años, pagadera a partir de sus 65 años de edad, e incluía, además, los gastos funerarios de la población beneficiada. A pesar de sus problemas de sostenibilidad, fraude y focalización, el bono se hizo efectivo y llegó a representar cerca del 13% del ingreso per cápita promedio. El financiamiento del bono se basó en los beneficios de las empresas capitalizadas (Fondo de Capitalización Colectiva – FCC<sup>10</sup>). Desde el punto de vista operacional, la falta de información exacta no permitió una buena estimación de la cobertura del pro-

10 Los problemas de financiamiento y el carácter político que le atribuyó el Gobierno determinaron un cambio de la modalidad de estas transferencias, por el Bolívica que, sin embargo, dejó de pagarse en 2002, y se reincorporó el Bonosol en 2003.

grama. En 2005, cerca de 449 000 personas mayores de 65 años recibieron un monto de alrededor de US\$ 200 anuales.

En 2008, el Bonosol fue reemplazado por otra transferencia no contributiva denominada “Renta dignidad”, que cuenta con lineamientos similares. Esta otorga un monto mensual de Bs 200 (aproximadamente US\$ 28) a personas mayores de 60 años que no reciben una renta del sistema contributivo de pensiones, y Bs 150 (cerca de US\$ 21) a las personas de esa edad pero que sí reciben pensión contributiva. En el año 2009, 771 562 personas mayores de 60 años fueron beneficiarias de esa renta.

En cuanto a la seguridad social de largo plazo, la Ley de Pensiones de 1997 introdujo una reforma que sustituyó el sistema de reparto por el de capitalización individual, administrado por Fondos de Pensiones<sup>11</sup>. Actualmente, los dos sistemas coexisten a la vez, aunque con distintos esquemas de financiamiento –los trabajadores que quedaron en el antiguo sistema están financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN)–. El número de jubilados que perciben beneficios del sistema de reparto decreció lentamente, de 134 mil beneficiarios en 2000 a más de 119 mil en 2007.

El número de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue 461 630 en el año 1998, y ya en 2007 supera el millón, de los cuales, más de 46 mil cotizantes lo hacen de manera independiente. Sin embargo, la cobertura aún depende de la incorporación de trabajadores asalariados, refleja la desigualdad salarial y no ha solucionado el problema de exclusión y falta de protección de los trabajadores más pobres.

11 El antiguo sistema de reparto estaba constituido por un fondo administrado por entidades públicas (Fondo de Pensiones Básicas - FOPEBA) que cubría alrededor del 43% de la pensión de los jubilados, y un sistema de fondos complementarios (FONCOM) administrados por los mismos trabajadores en las diferentes actividades. Los FONCOM cubrían el 57% adicional de la jubilación percibida por los beneficiarios (Jemio, 2006).

*Situación y flexibilidad de la política de protección social a partir de 2006*

En el marco del PND, se diseñó la Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario (PPS-DIC). Bajo una estrategia de largo plazo, esta propone desarrollar un sistema integrado de protección social, asignando responsabilidades en las tres instancias de gobierno (central, departamental y municipal) y en los principales sectores sociales (salud, educación y empleo), con el fin de erradicar la pobreza, la exclusión social y reducir las situaciones de riesgo de los diferentes grupos poblacionales.

Además de los programas ya existentes, como la “Renta dignidad”, recientemente se han ido desarrollando otros importantes. En el campo del empleo, PROPAÍS ha buscado generar empleo temporal en comunidades con altos índices de extrema pobreza; “Empleo digno intensivo de mano de obra” (EDIMO) ha promovido el empleo en áreas afectadas por desastres naturales; y el programa de Jóvenes en Acción, “Mi primer empleo digno”, ha estado dirigido a incrementar la inserción laboral de jóvenes de escasos recursos. El “Bono Juancito Pinto”, por su parte, ha estado dirigido a niños y niñas de escuelas públicas que cursan entre primero y octavo grados de primaria. Consiste en un subsidio de Bs 200 al año (aproximadamente US\$ 28) como incentivo a la permanencia escolar, el cual se paga a partir de 2007 a todos los alumnos registrados en las listas de las escuelas públicas (1 728 751 estudiantes en 2009). Estudios preliminares destacan que el bono promovió la matriculación y la asistencia de niños y niñas a escuelas públicas. Finalmente, el programa “Desnutrición 0” ha tenido como objeto mejorar la alimentación y el cuidado integral de niños y niñas menores de cinco años y mujeres embarazadas en período de lactancia.

En términos agregados, la prioridad macroeconómica del gasto social<sup>12</sup> desde la segunda mitad de la década pasada, cuando alcanzó a 15,2% del PIB, se incrementó de manera sostenida hasta el 2003, año en que el gasto social significó 18,3% del PIB, incluyendo el gasto en pensiones y jubilaciones. Posteriormente, a partir de 2004, hasta 2007, este tendió a decli-

12 Gasto en moneda corriente entre PIB también en moneda corriente.

nar, tanto en el componente de gasto corriente como en el de inversión, alcanzando, en promedio anual, 17,6% del PIB, aspecto que puede explicarse por el aumento sostenido del PIB durante este período. Las políticas sociales implementadas en 2008 permitieron incrementar el gasto social a 18,8% del PIB, cuando el producto alcanzó una tasa de crecimiento de 6,2%. La distribución sectorial muestra una expansión particularmente del gasto en servicios de educación que, en 2002 alcanzó cerca del 8% del PIB (incluyendo los gastos administrativos). Dicha tendencia es compartida por el gasto en el sistema de pensiones que se elevó rápidamente hasta alcanzar casi 5% del PIB. Las bajas tasas de crecimiento del PIB y la inflexibilidad de algunas de ellas determinaron un aumento de la proporción del PIB destinada a los sectores sociales.

Desde el punto de vista de la prioridad fiscal, en 1995 el gasto social significaba 36,3% del gasto del sector público no financiero (SPNF), mientras que en 2005 superó el 55%. El incremento de los recursos orientados al sector social formó parte del cambio estructural en el rol del Estado, con énfasis en los servicios sociales y el diseño estatal con mayor descentralización de las competencias y la asignación de los recursos. Como porcentaje del gasto del SPNF, el sector educación participa de casi 20%, superando al gasto del sistema de pensiones por casi seis puntos y duplicando el gasto en salud y otros.

El gasto social muestra un claro comportamiento procíclico, tanto en el gasto corriente como en el capital. En términos sectoriales, el gasto en pensiones tuvo mayor vulnerabilidad respecto a las fluctuaciones en la actividad económica. A pesar de los esfuerzos realizados, el Estado, en realidad, destina escasos recursos a los programas de protección social y la mayor parte pertenece al sistema previsional. También, los programas sociales aún no responden a la magnitud del problema de vulnerabilidad de los hogares, son de corto plazo y asistenciales, y la sostenibilidad fiscal no está garantizada para respaldarlos. Es importante realizar una evaluación de los sistemas de protección social, y mejorar la orientación de los beneficios, así como de la asignación de los recursos y costos. La reducción de la pobreza y el impulso al crecimiento dependen crucialmente de una mejor inversión social en el futuro.

## Análisis de simulaciones de equilibrio general

En esta sección se analizan los resultados de la aplicación del modelo de equilibrio general computable, MACEPES (véase el capítulo anterior), con datos de Bolivia. Se persigue el objetivo de entender los impactos de choques externos y políticas de protección social sobre una economía pequeña y abierta como la boliviana. Asimismo, se examina la respuesta potencial a diversos choques mediante la implementación de políticas públicas de protección social que busquen aminorar y/o aprovechar los impactos<sup>13</sup>.

### *Escenario base*

Luego de haber aplicado el MACEPES con datos de Bolivia (es decir, habiéndolo calibrado), sobre la base de información provista por UDAPE, se generó un escenario base. Dado que el año base del modelo de Bolivia es 2006, se utilizó información oficial del período 2006-2008 y proyecciones de UDAPE del período 2009-2015 para varios agregados macro a los cuales se puede imponer una trayectoria. Las proyecciones de crecimiento de los principales componentes macroeconómicos provienen de las estimaciones realizadas para el PND; sin considerar los proyectos energéticos (petroquímica y exportación de energía eléctrica). Este escenario se genera utilizando las reglas macroeconómicas de cierre elegidas para todos los estudios de país incluidos en esta publicación (véase el capítulo anterior)<sup>14</sup>. A pesar de esto, se trata de un conjunto de reglas de cierre que permiten reflejar relativamente bien la política económica de Bolivia. En términos generales, como se observa en Canavire-Bacarreza y Mariscal (2010), el escenario base generado refleja bastante bien las tendencias generadas a partir de los datos oficiales y las proyecciones realizadas por UDAPE.

Para después del año 2009, la tasa estimada de crecimiento económico promedio, así como la inversión se encuentran asociadas a la continui-

13 Una descripción de la calibración del modelo, las elasticidades y una descripción más detallada de los resultados de su aplicación se pueden encontrar en Canavire-Bacarreza y Mariscal (2010).

14 Para mantener el balance fiscal fijo como proporción del PIB, el Gobierno ajusta sus ingresos por medio de la tasa del impuesto directo a los ingresos.

dad de las ventas de gas a Brasil y Argentina y al desarrollo del sector minero-metalúrgico mediante el proyecto Mutún. Las exportaciones y las importaciones muestran tasas de crecimiento moderadas durante el período 2009-2012, asociadas también al proyecto Mutún, estimándose mayores volúmenes de producción para la exportación a partir del año 2012. Las proyecciones del consumo público presentan un comportamiento tendencial de alrededor del 4%, suponiendo tasas mayores en los años pre-electorales y electorales (siguiendo los ciclos político-económicos de 2010, 2011 y 2015).

En cuanto al mercado de trabajo, existe un crecimiento constante de la fuerza de trabajo, que coincide con el crecimiento poblacional reportado por el INE. La tasa de desempleo abierto se mantiene relativamente constante (alrededor del 5%), con un ligero incremento en el período 2009-2012. Cabe resaltar que la solución del modelo asume que el desempleo se crea en el mercado de trabajo formal, donde predomina un salario real inflexible a la baja, mientras el mercado de trabajo informal se encuentra en constante equilibrio, en la medida que se paga el “salario de mercado”.

Una vez combinados los resultados del mercado laboral del MACEPES con una metodología de microsimulaciones (véase el capítulo anterior), se observa un incremento de los ingresos de los hogares, producto de los cambios simulados en el crecimiento y en el empleo, y son los pobres los que se benefician más de esta proyección. Como resultado de esto, hay una ligera, pero sostenida, reducción en la desigualdad, en coherencia con los datos oficiales. Asimismo, la pobreza extrema se reduce.

### *Análisis de las simulaciones*

Se realizaron tres tipos de simulaciones, que tomaron como punto de referencia la situación del escenario base y la variaron de diferentes formas, durante el período 2010-2012. El primer grupo incluye choques externos; el segundo, una serie de políticas de protección social; y el último combina los principales choques externos con las políticas que se determinó que podrían aminorar de manera más efectiva los impactos adversos de los choques. Los principales resultados de estas simulaciones se resumen en el Cuadro N.º 3.

En la primera simulación (Sim1), el precio mundial de los principales productos de exportación se reduce en un 50% durante 2010-2012; estos productos, en conjunto, representan el 80,3% de las exportaciones netas, siendo el más representativo el gas, con 42,3%. Se trata de una simulación de gran relevancia debido a la vulnerabilidad que presenta la economía boliviana ante este tipo de choques externos. De hecho, se observa una contracción severa de las exportaciones respecto al escenario base (10,8%), que genera un déficit comercial debido a lo cual ocurre una depreciación cambiaria que desestimula las importaciones para ajustar el sector externo. La disminución de la actividad económica –especialmente de los sectores afectados por el choque– contrae el PIB, los ingresos y el consumo de Gobierno, disminuyendo el superávit fiscal en 3,5 puntos del PIB respecto al escenario base. La inversión se contrae dramáticamente (56,6%), y la desacumulación de capital resultante continúa afectando la producción después de simulado el choque externo. Asimismo, el choque impacta negativamente al empleo formal, por lo que el nivel de contribuciones sociales y el consumo de la institución de la seguridad social (*ssoc*) disminuyen, conmoviendo la prestación de servicios de dicha institución.

La tasa de desempleo abierto aumenta en relación al escenario base, efecto que se refleja principalmente en el sector de trabajadores formales, donde el empleo cae en 4,8%. Este fuerte efecto negativo se da principalmente por la alta concentración de empleo formal en los sectores afectados. Las consecuencias negativas en el mercado laboral resultan en una caída de los ingresos de los hogares, lo cual tiene un mayor impacto en términos de pobreza en los sectores medios de la distribución, que es donde se concentran los trabajadores de los sectores afectados. De hecho, casi un 5,4% adicional de la población pasa a ser tanto de pobres moderados como de pobres extremos, según las líneas de pobreza nacionales. Por el lado de la distribución del ingreso, no existen choques muy fuertes, y apenas se observa un ligero incremento en el índice de Gini.

La segunda simulación (Sim2) consiste en un incremento del 50% del precio internacional de los alimentos agrícolas no industriales y los alimentos procesados que, en el caso de Bolivia, de manera conjunta, representan el 28% del consumo total de los hogares y el 59% del consumo solo de bienes. Bolivia es un importador neto del primer tipo de alimen-

tos y un exportador neto del segundo, y debido a esta particularidad se nota un efecto de compensación interesante. Las exportaciones del segundo grupo de alimentos aumentan, pero el impacto en las exportaciones totales es poco perceptible (0,2%) por su relativamente bajo peso en ellas (11,8%). Por las características del choque, también se ven afectados los productos agrícolas no industriales, que se tornan más costosos, reduciéndose sus importaciones de manera más acelerada que el crecimiento observado en sus exportaciones. Ello resulta en un desbalance externo que se corrige mediante una apreciación del tipo de cambio real que termina favoreciendo las importaciones. Debido a que Bolivia es un proveedor de la mayor parte de productos agrícolas no industriales, no se observa un impacto negativo en el consumo de los hogares, y si bien existe un incentivo a la producción de los bienes impactados por el cambio en los precios internacionales, el crecimiento de las importaciones de bienes sustitutos manufacturados es mucho más fuerte, con lo cual el PIB se contrae en un 1,7%.

Cuadro N.º 3  
Bolivia: principales resultados macroeconómicos, del mercado laboral, la pobreza y la distribución del ingreso de las simulaciones realizadas (2010-2015) (variación con respecto al escenario base)<sup>1/</sup>

	Sim1	Sim2	Sim3	Sim4	Sim5	Sim6	Sim7	Sim8	Sim9	Sim10	Sim11
Tipo de cambio real	29,6	-11,8	-11,6	9,9	3,7	-7,1	0,2	-1,7	-1,3	-0,2	-0,2
Formación bruta de capital fijo <sup>2/</sup>	-56,6	-1,5	47,6	-61,7	-0,5	-77,3	-0,9	-19,9	-14,0	-2,5	-9,8
Consumo de los hogares <sup>2/</sup>	-9,0	2,3	6,4	-4,6	-5,8	13,2	0,5	2,9	2,0	0,5	4,1
Consumo del Gobierno <sup>2/</sup>	-16,9	0,8	12,5	-1,9	0,4	-11,6	0,0	-1,3	-0,9	-0,1	6,6
Consumo institución seguridad social <sup>2/</sup>	-12,8	1,2	9,6	-5,2	-0,9	-7,3	0,2	-2,2	-1,6	-0,2	0,0
Exportaciones <sup>2/</sup>	-10,8	0,2	-1,3	7,0	4,4	-9,4	0,4	-2,6	-1,8	-0,3	0,0
Importaciones <sup>2/</sup>	-27,0	8,8	24,5	-20,6	-4,7	-10,7	0,5	-2,8	-2,0	-0,3	0,2
PIB a precios de mercado <sup>2/</sup>	-13,8	-1,7	5,9	-5,4	-0,3	-8,3	0,1	-2,3	-1,6	-0,2	1,3
Gasto total del Gobierno	-9,3	-0,7	8,6	-2,1	0,3	-4,3	0,2	10,1	6,9	1,8	0,2
Ingresos corrientes del Gobierno	-22,6	-6,4	23,9	-2,2	1,4	-51,9	-0,3	-3,2	-2,3	-0,3	-4,4
Superávit fiscal / PIB	-3,5	-1,8	3,2	0,3	0,4	-14,8	-0,1	-2,6	-1,8	-0,4	-1,4
Déficit cuenta corriente / PIB	-6,4	1,4	2,5	-12,9	-0,5	-2,4	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,1
Tasa de desempleo abierto	1,4	-0,2	-1,0	1,1	0,2	-0,2	-0,1	0,3	0,2	0,0	-1,3
Empleo	-1,4	0,2	1,0	-1,1	-0,2	0,2	0,1	-0,3	-0,2	0,0	1,3
- Hombres	-1,7	0,4	1,1	-1,4	-0,3	0,4	0,1	-0,3	-0,2	0,0	1,7
- Mujeres	-1,2	0,1	1,0	-0,8	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,9
- Formales	-4,8	-0,4	3,5	-3,6	-0,6	-2,7	0,2	-1,6	-1,2	-0,1	5,8
- Informales	-0,1	0,5	0,0	-0,1	-0,1	1,4	0,0	0,3	0,2	0,0	-0,4

- Calificados	-2,2	0,0	2,0	-2,0	-0,4	-0,4	0,1	-0,7	-0,5	-0,1	2,5
- No calificados	-0,7	0,4	0,1	-0,4	-0,1	0,8	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Ingreso laboral promedio	-8,6	6,6	5,3	-7,2	-1,8	18,9	0,4	0,2	0,2	-0,1	6,1
- Hombres	-8,0	6,3	4,7	-6,8	-1,6	19,0	0,3	0,3	0,2	-0,1	5,9
- Mujeres	-10,0	7,2	6,6	-8,0	-2,2	18,2	0,4	0,2	0,1	0,0	6,2
- Formales	-4,9	1,2	3,8	-4,2	-0,8	3,7	0,2	-1,2	-0,9	-0,1	5,5
- Informales	-10,5	13,6	5,0	-9,0	-2,7	39,1	0,4	3,0	2,2	0,1	3,2
- Calificados	-6,1	0,9	5,5	-6,9	-1,4	2,3	0,4	-2,0	-1,5	-0,2	6,2
- No calificados	-12,4	16,8	4,0	-7,2	-2,5	48,8	0,3	4,6	3,4	0,2	4,9
Ingreso de los hogares											
- Rurales no pobres	-10,5	5,5	5,3	-6,0	-5,2	17,7	0,4	0,2	-0,1	0,6	3,4
- Rurales pobres	-8,9	7,1	3,0	-4,6	-2,5	19,9	0,2	28,4	20,6	0,9	2,4
- Urbanos no pobres	-9,2	0,3	7,5	-4,3	-6,8	6,0	0,5	-1,9	-1,5	0,2	4,9
- Urbanos pobres	-9,8	3,9	5,6	-5,5	-5,0	14,1	0,4	5,9	4,3	1,0	2,9
Pobreza extrema intemacional <sup>3/</sup>	3,1	0,0	-1,0	2,2	0,6	0,2	-0,1	-1,3	-1,1	0,0	-1,1
Pobreza extrema nacional <sup>3/</sup>	5,4	-0,8	-2,8	3,9	1,4	-1,6	-0,2	-2,0	-1,1	-0,2	-2,7
Pobreza moderada nacional <sup>3/</sup>	5,4	-1,6	-3,7	4,1	1,5	-2,4	-0,2	-0,4	-0,1	0,1	-3,6
Índice de Gini (ingreso per cápita)	-0,001	-0,004	0,000	0,005	0,001	-0,010	0,000	-0,012	-0,007	-0,001	-0,001
Índice de Gini (ingreso laboral)	-0,001	-0,001	0,002	0,005	0,002	0,001	0,000	0,001	0,001	0,000	0,001

(Continúa...)

	Sim12	Sim13	Sim14	Sim15	Sim16	Sim17	Sim18	Sim19	Sim20	Sim21
Tipo de cambio real	28,6	29,0	29,6	-13,1	-12,4	8,6	8,9	9,7	-16,4	-11,2
Formación bruta de capital fijo <sup>2/</sup>	-76,1	-70,3	-66,8	26,9	33,0	-81,4	-75,6	-71,3	-83,1	-2,5
Consumo de los hogares <sup>2/</sup>	-6,2	-7,1	-5,3	9,4	8,5	-1,9	-2,8	-0,8	14,0	2,7
Consumo del Gobierno <sup>2/</sup>	-18,2	-17,8	-11,5	11,1	11,5	-3,3	-2,9	4,5	-11,2	0,8
Consumo institución seguridad social <sup>2/</sup>	-15,5	-14,7	0,0	7,4	8,0	-7,5	-6,9	0,0	-6,5	1,3
Exportaciones <sup>2/</sup>	-13,4	-12,7	-11,0	-3,7	-3,0	4,1	4,9	6,8	-9,4	0,7
Importaciones <sup>2/</sup>	-29,8	-29,0	-27,1	21,7	22,5	-23,8	-22,9	-20,6	-7,5	9,1
PIB a precios de mercado <sup>2/</sup>	-16,1	-15,5	-12,6	3,6	4,2	-7,8	-7,1	-4,2	-10,0	-1,5
Gasto total del Gobierno	0,8	-2,4	-9,1	18,5	15,3	7,9	4,7	-2,0	-5,0	-0,5
Ingresos corrientes del Gobierno	-25,5	-24,7	-27,8	20,0	21,1	-5,6	-4,7	-6,9	-60,1	-6,8
Superávit fiscal / PIB	-6,8	-5,8	-5,5	0,9	1,7	-2,5	-1,6	-1,2	-17,3	-1,9
Déficit cuenta corriente / PIB	-6,9	-6,7	-6,3	2,4	2,5	-13,3	-13,2	-12,7	-1,2	1,3
Tasa de desempleo abierto	1,7	1,6	0,1	-0,7	-0,8	1,4	1,3	-0,2	-0,2	-0,3
Empleo	-1,8	-1,7	-0,1	0,8	0,8	-1,5	-1,4	0,2	0,2	0,3
- Hombres	-2,1	-2,0	0,0	0,8	0,8	-1,8	-1,7	0,3	0,4	0,4
- Mujeres	-1,4	-1,4	-0,3	0,7	0,8	-1,1	-1,0	0,1	0,0	0,1
- Formales	-6,8	-6,2	1,1	1,9	2,4	-5,4	-4,9	2,1	-3,4	-0,2
- Informales	0,2	0,1	-0,6	0,3	0,2	0,1	0,1	-0,6	1,7	0,5
- Calificados	-3,2	-2,9	0,2	1,3	1,5	-2,8	-2,6	0,5	-0,5	0,1
- No calificados	-0,5	-0,6	-0,4	0,3	0,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,8	0,4
Ingreso laboral promedio	-8,9	-8,8	-2,9	5,7	5,6	-7,3	-7,3	-1,6	25,1	7,0

- Hombres	-8,2	-8,1	-2,5	5,2	5,1	-6,9	-6,8	-1,4	25,1	6,7
- Mujeres	-10,3	-10,2	-4,2	7,0	6,9	-8,2	-8,1	-2,2	24,7	7,6
- Formales	-6,5	-6,0	0,3	2,7	3,0	-5,5	-5,2	1,0	5,1	1,5
- Informales	-8,0	-8,7	-7,9	8,4	7,5	-6,5	-7,2	-6,2	51,5	14,0
- Calificados	-8,7	-8,0	-0,1	3,6	4,2	-9,2	-8,5	-0,9	2,8	1,3
- No calificados	-8,1	-9,3	-8,2	9,0	7,7	-3,0	-4,2	-2,9	65,3	17,2
Ingreso de los hogares										
- Rurales no pobres	-10,5	-10,7	-7,6	5,7	5,3	-6,1	-6,3	-2,9	22,5	6,0
- Rurales pobres	19,4	11,6	-6,9	31,7	23,8	23,6	15,8	-2,5	26,2	7,4
- Urbanos no pobres	-11,2	-10,8	-4,7	5,6	6,0	-6,4	-6,0	0,3	6,4	0,8
- Urbanos pobres	-4,1	-5,7	-7,3	11,6	10,0	0,1	-1,4	-2,9	17,5	4,3
Pobreza extrema internacional <sup>3/</sup>	1,0	2,4	1,3	-2,8	-2,2	1,0	1,3	2,2	0,3	-0,1
Pobreza extrema nacional <sup>3/</sup>	3,8	5,0	2,1	-5,3	-4,0	2,3	3,1	3,8	-1,8	-1,0
Pobreza moderada nacional <sup>3/</sup>	6,5	6,0	2,7	-4,3	-4,0	4,2	4,2	4,1	-3,1	-1,8
Índice de Gini (ingreso per cápita)	-0,012	-0,006	-0,001	-0,011	-0,007	-0,007	-0,003	0,005	-0,011	-0,005
Índice de Gini (ingreso laboral)	-0,001	0,000	0,001	0,002	0,002	0,006	0,006	0,005	0,003	-0,001

1/ La variación con respecto al escenario base es porcentual, excepto para: el superávit fiscal y el déficit de la cuenta corriente, que se expresan en puntos porcentuales del PIB; la pobreza, que se presenta en puntos porcentuales de la población; y el coeficiente de Gini, que denota un cambio en puntos del indicador. La definición de las simulaciones se presenta en el texto.

2/ Variable denominada en términos reales, en miles de bolivianos de 1990.

3/ Incidencia como porcentaje de la población. La línea internacional que define la pobreza extrema internacional es de US\$1,25 diarios a poder de paridad adquisitivo. Fuente: MACEPES de Bolivia y microsimulaciones con base en la Encuesta de Hogares de 2006.

El incentivo a la producción de alimentos provoca una demanda de mano de obra no calificada, aumentando el empleo informal. En general, los resultados en el mercado laboral son relativamente pequeños y comparables con los efectos que el choque tiene sobre el PIB. La tasa de desempleo se reduce ligeramente, al tiempo que se generan más empleos en el sector informal de la economía. El aumento en los ingresos de los trabajadores, especialmente informales y no calificados, se refleja en el cambio del ingreso de los hogares no pobres, especialmente rurales. Por lo tanto, la pobreza total y extrema muestra una reducción de 1,6 y casi un punto porcentuales, respectivamente. Existe un impacto muy ligero en términos de desigualdad debido, principalmente, al cambio en las remuneraciones relativas.

Para Bolivia, las exportaciones de gas natural representan el 48,6% del total de exportaciones netas de servicios. En una tercera simulación (Sim3), en la que el precio de dichas exportaciones aumenta en un 50%, se puede ver la fuerte incidencia que tiene la exportación de gas natural en la economía y en el presupuesto fiscal<sup>15</sup>. Este choque tiene un fuerte impacto en el consumo intermedio y un efecto en el ingreso del Gobierno, de manera inicial también muy fuerte. Por la relativamente baja rentabilidad de los sectores que producen otros transables, hay una reasignación de recursos hacia el sector extractivo. Los efectos de sustitución son sumamente fuertes, aspecto que también puede ser explicado por la ausencia en el sector extractivo de los suficientes recursos y la capacidad productiva para poder cumplir con la demanda exportadora, por lo que para exportar más hay que dejar de exportar otros bienes. La expansión de la producción y las exportaciones impacta en los ingresos fiscales, que se expanden, generándose una holgura fiscal y un incremento del gasto público total a una tasa de 8,6%. El superávit fiscal emergente incrementa el ahorro disponible para el financiamiento de la inversión, permitiendo generar aumentos en la producción inclusive después de simulado el cho-

15 La producción de petróleo crudo y gas natural se encuentra agrupada en el modelo de Bolivia. La simulación implica una subida en el precio del gas natural, asociada, en este caso, al precio del petróleo. El precio de exportación de gas natural vigente en los contratos que Bolivia tiene con Argentina y Brasil considera, dentro de su estimación, la variación de precios del petróleo con un rezago aproximado de seis meses.

que. La expansión en la producción reduce el desempleo e incrementa el salario real de todos los tipos de trabajadores, elevando los niveles de consumo privado; y algo similar acontece con el consumo de la institución administradora de la seguridad.

Dado que el sector de hidrocarburos es un sector intensivo en capital, que requiere trabajadores calificados, el empleo de este tipo de trabajadores es mayor al del escenario base (en tres puntos porcentuales), generando mayor empleo del sector formal. Finalmente, a pesar de haber una ligera reducción en el empleo informal, los trabajadores de este segmento ven incrementado su salario promedio en la medida que hay cierta migración al segmento formal, de tal forma que menos trabajadores informales quedan empleados, pero con mayores salarios. Sin embargo, hay un ligero, aunque poco significativo, deterioro en la distribución del ingreso familiar. Debido al aumento en el empleo y el ingreso laboral, se advierte una reducción de la pobreza extrema y moderada con respecto al escenario base, que tiende a ser más intensa para los menos pobres, producto del incremento en las remuneraciones relativas, especialmente del sector formal calificado.

Mediante la cuarta simulación (Sim4) se examinan los efectos de una salida de flujos de capital del 50%, excluyendo la IED. En el caso de Bolivia, dichos flujos abarcan aproximadamente un 12% del PIB. La salida de capitales resulta en un desbalance externo expresado en un menor financiamiento de la cuenta corriente que, por tanto, debe corregirse mediante una depreciación del tipo de cambio real. La salida de capital limita la acumulación, por lo que la inversión cae en 61,7% en promedio anual. La disminución de la producción nacional y las importaciones reduce la oferta total de bienes. Al mismo tiempo, por el aumento del desempleo, se ven afectados los ingresos de los hogares, con la consecuente caída del consumo privado. La contracción económica, también, reduce el presupuesto del Gobierno y las contribuciones sociales.

El incremento significativo en la tasa de desempleo abierto afecta principalmente a los trabajadores formales calificados. Los informales ven reducido su ingreso en un 9% a medida que se contrae la producción agrícola, y un número de trabajadores se desplaza desde el sector formal al informal, ocasionando un aumento en la oferta potencial de trabajadores que termina afectando los salarios en el sector informal. Complementa-



riamente, la caída en las remuneraciones relativas es desfavorable para las trabajadoras no calificadas informales y ello termina aumentando la desigualdad de la distribución del ingreso de manera modesta. Debido a los efectos desfavorables en el empleo y los ingresos, aumentan la pobreza moderada y la extrema.

Las remesas, que se han convertido en una fuente importante de divisas para el país, se reducen en un 50% en la quinta simulación (Sim5). En este caso, los menores ingresos de divisas tienen un impacto sobre el sector externo, que es corregido por una leve depreciación del tipo de cambio real. La disminución de remesas contrae el ingreso de todos los grupos de hogares, afectando su capacidad de compra, con la consecuente contracción del consumo privado (5,8%) y una reducción de la inversión. La disminución de la absorción provoca una leve contracción de la actividad económica, especialmente en actividades dedicadas a producir bienes para el mercado interno, provocando una caída ligera en el producto.

El choque genera desequilibrios en el mercado laboral mediante una leve disminución del empleo formal, que es capaz de alterar ligeramente la tasa de desempleo abierto. Los hogares más afectados por la caída de remesas son los menos pobres, debido a los altos niveles de emigrantes que se encuentran en este segmento de la población (Bastia, 2005). Esto explica el ligero incremento en la pobreza extrema medida por línea de pobreza internacional. En términos de distribución del ingreso según el coeficiente de Gini, no se observan cambios significativos.

Lo que cabe preguntarse a continuación es qué políticas podrían aminsonar los efectos adversos de los principales choques externos simulados. Los resultados de la aplicación de un subsidio de 50% al consumo de los alimentos son analizados en una sexta simulación (Sim6). En este caso, se afectó el valor de los productos cuyo precio mundial varió en la segunda simulación (Sim2). Esto permite incrementar el consumo privado de los productos subsidiados, y ello, a la vez, tiene como contrapunto un aumento de la oferta para el mercado interno de dichos productos. De esta forma, las exportaciones se contraen, generándose un déficit comercial que es corregido al depreciarse el tipo de cambio real. El subsidio afecta negativamente los ingresos fiscales y, en consecuencia, el consumo público cae. Por la disminución del empleo formal, las contribuciones a la

seguridad social son menores, con lo cual también se contrae el consumo de servicios de salud y protección social. El gasto del Gobierno incluso cae más que el de la seguridad social, pero el cambio es mucho menor al mostrado por la disminución de los ingresos públicos, de tal forma que el superávit fiscal disminuye en 14,8 puntos porcentuales del PIB. Esto estruja la inversión fuertemente y, aunado a la contracción de las exportaciones, termina reduciendo la producción en un 8,3%.

Por el impacto negativo sobre la producción, se contrae el empleo de los trabajadores formales calificados. Se observan, además, fuertes incrementos en las remuneraciones, principalmente de trabajadores no calificados en el sector informal, que ven incrementada la demanda de ellos. Esto ocasiona una reducción pequeña del coeficiente de Gini de los ingresos laborales y, por medio del impacto favorable en el ingreso de los hogares, principalmente de los más pobres, se reducen la pobreza total y la extrema.

Una política que ha sido utilizada en Bolivia, en los últimos años, para atenuar choques asociados al incremento de precios es la disminución de los aranceles a la importación de alimentos, cuyos resultados son analizados mediante una disminución de dicho instrumento en una séptima simulación (Sim7). Los resultados de equilibrio general son bastante pequeños: la producción prácticamente no varía en el agregado, y la pobreza muestra una caída marginal. Esto se debe a que el arancel aduanero para las importaciones de productos alimenticios en Bolivia es bastante bajo, encontrándose, en promedio, en un rango entre 5% y 15%.

En la siguiente simulación (Sim8) se evalúa el impacto de una transferencia del Gobierno a los hogares, asociada a la educación, equivalente a US\$ 25 por cada niña/niño en edad de asistir a la primaria, en situación de pobreza. Si bien este ejercicio no valora precisamente el impacto del “Bono Juancito Pinto”, por sus similitudes, los resultados pueden asociarse. La transferencia a los hogares inyecta recursos a la economía familiar, favoreciendo más a los hogares rurales pobres, cuyos ingresos se ven acrecentados de manera sustancial, impactando en el consumo privado, que crece en 2,9% anual. Los productos con mayor incremento en su demanda compuesta (producción doméstica e importaciones) son los alimentos –agrícolas no industriales y alimentos procesados–, de los cuales los pro-

cesados son importados mayormente. Si bien las importaciones totales se contraen, ingresa mayor cantidad de alimentos procesados, desincentivando su producción nacional. La mayor importación genera un desequilibrio externo, ajustado mediante una apreciación cambiaria, que desincentiva las exportaciones en niveles casi similares a los de la caída de las importaciones. La contracción de la actividad interna afecta los ingresos fiscales y, pese a observarse una disminución del consumo público, el gasto total se incrementa en 10,1%, lo que resulta en una reducción del superávit fiscal y una posterior caída del PIB. La reducción de la producción afecta el empleo formal, disminuyendo las contribuciones a la seguridad social; y con ello, las posibilidades de ampliar la cobertura de servicios de salud y protección social.

La transferencia a los hogares es una política que tiene poco efecto en términos de mercado de trabajo. Como era de esperarse, se da una reducción casi imperceptible en el índice de Gini del ingreso laboral, debido al poco cambio encontrado en los ingresos laborales. Sin embargo, se observa una reducción bastante importante en la desigualdad, medida por el ingreso del hogar per cápita. Por el lado de la pobreza, los efectos son también muy importantes; de hecho, es primordial resaltar el impacto que la política tiene sobre los más pobres de la distribución, medida principalmente por la línea de pobreza internacional. En suma, estos resultados muestran el alto potencial de este tipo de políticas, en términos no solo de redistribución del ingreso, sino por alcanzar a los más pobres de la distribución.

Mediante la Simulación 9 (Sim9) se evalúa una transferencia similar a la anterior, pero de menor magnitud, por tratarse de una que afecta a una población meta mucho menor: US\$ 67 por cada individuo mayor de 65 años que no cotiza para ningún programa de seguridad social, viviendo en condición de pobreza. Esta transferencia se puede asociar a la “Renta dignidad”, aplicada en Bolivia a partir de la reforma del sistema de pensiones. Como la magnitud del cambio es menor a la realizada en la simulación anterior, y las simulaciones son similares, los impactos muestran la misma dirección, pero en distinto grado (ver Cuadro N.º 3). Así, en términos de pobreza, el principal efecto se da en la moderada, que se reduce en aproximadamente un punto porcentual.

También se simuló el efecto de la implementación de un programa de subsidio temporal al desempleo<sup>16</sup> (Sim10). Se supone que el Gobierno estaría dispuesto a cubrir 18% del salario de los trabajadores no calificados desempleados, no empleados en el sector informal. Esta política acarrea un incremento del ingreso de los hogares, en especial de los pobres extremos, otorgándoles mayor poder de compra. Como el subsidio implica un gasto adicional para el Gobierno, el gasto total de esta institución se expande, disminuyendo de manera leve el superávit fiscal y restringiendo la inversión con una muy leve caída en la producción y en el empleo de trabajadores formales calificados. La consecuente reducción de las contribuciones sociales también termina afectando levemente el consumo de la *ssoc*. Los impactos sobre la pobreza son muy pequeños.

Una alternativa para reducir la informalidad o el desempleo que también se analizó, aunque no se ha utilizado en Bolivia, es una disminución (del 50%) de la tasa de contribución a la seguridad social (Sim11). Este tipo de política reduce los costos de producción de las actividades, incrementándose la demanda de trabajadores formales y, en consecuencia, el PIB, a través del aumento de la demanda. Las actividades más dinamizadas resultan ser servicios y productos manufacturados, por absorber mano de obra calificada. La demanda de trabajadores implica un mayor ingreso y la ampliación de la capacidad de gasto de los hogares, por lo que el consumo privado es mayor. Los grupos de hogares más beneficiados son los urbanos no pobres, por incluir a personal calificado; aunque el impacto se siente en todos los grupos de hogares, estos experimentan una caída importante de la pobreza total y extrema, aun cuando hay pocos cambios distributivos. La reducción de la tasa de contribuciones sociales es compensada a través del aumento del empleo formal y la captación de mayores contribuciones, de manera que no existen cambios en el consumo de la *ssoc*. Contrariamente, el consumo público se expande a una tasa de 6,6% en relación al escenario base, posibilitando la ampliación de la cobertura de otros servicios públicos, entre los que se encuentra la educación.

<sup>16</sup> Si bien Bolivia no cuenta con ningún programa similar, este fue un importante tema de discusión al decidir sobre la utilización de los recursos hidrocarbúricos, aspecto que no prosperó.

El análisis realizado en torno a las simulaciones, tomando en consideración la evaluación realizada en las secciones anteriores del capítulo, muestra que los principales riesgos para la economía boliviana radican en cambios de precios mundiales (exportaciones, petróleo y alimentos), así como en la salida de capitales. Los primeros tienen los efectos negativos más fuertes sobre el empleo, la pobreza y la desigualdad. Adicionalmente, las simulaciones de política permiten hallar que las políticas de protección social más efectivas, en términos de reducción de pobreza, son las de transferencias y reducción en las contribuciones de los patrones.

En el Cuadro N.º 3 se presenta la combinación de las simulaciones de choques externos con las de política, de la siguiente manera:

- **Sim12:** Sim1 combinada con Sim8.
- **Sim13:** Sim1 combinada con Sim9.
- **Sim14:** Sim1 combinada con Sim11.
- **Sim15:** Sim3 combinada con Sim8.
- **Sim16:** Sim3 combinada con Sim9.
- **Sim17:** Sim4 combinada con Sim8.
- **Sim18:** Sim4 combinada con Sim9.
- **Sim19:** Sim4 combinada con Sim11.
- **Sim20:** Sim2 combinada con Sim6.
- **Sim21:** Sim2 combinada con Sim7.

Los resultados de estas simulaciones combinadas muestran que las políticas asociadas a las transferencias de hogares son bastante efectivas en términos de aminorar el impacto sobre la pobreza que causan los principales choques externos, siempre y cuando existan los recursos suficientes para financiarlas, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Si bien estas medidas de política económica tienen un costo fiscal, el impacto social es fuerte: los ingresos de los hogares tanto del área urbana como rural mejoran sustancialmente, se contrae la pobreza moderada y extrema, y se da una disminución –aunque ligera– de los niveles de desigualdad.

En cuanto a la política de disminución de las contribuciones a la seguridad social por parte del patrón, se encuentra que su aplicación sería favorable en los ámbitos económico y social. Esta medida posibilita el au-

mento del empleo formal, contrarresta la caída observada en los ingresos de los hogares, producto de los choques externos, y restituye a los niveles iniciales (del escenario base) el consumo de la *ssoc*. Además, en términos fiscales, no resulta tan costosa, si se considera que a través de ella se mejoran los servicios públicos relacionados con la educación y la salud, sobre todo. Adicionalmente, este tipo de políticas se considera atractivo, considerando que la reducción en la inversión no es extremadamente grande y es relativamente manejable.

### Conclusiones y recomendaciones de política

Las simulaciones generadas mediante el MACEPES y su complemento con las microsimulaciones permitieron medir los impactos macroeconómicos y en la pobreza de cinco choques externos que han afectado de manera recurrente la economía boliviana, en distintos períodos. Los choques analizados tienen bastante relevancia, especialmente los relacionados con fluctuaciones de los precios mundiales de los principales productos de exportación; así como una fuerte salida de capitales del país. En este sentido, las simulaciones presentadas en el capítulo cobran especial importancia, en un contexto de crisis internacional en el cual se estima que entre los principales canales mediante los cuales la crisis afecta a Bolivia están la variación de los precios mundiales, la salida de capitales y la reducción en las remesas del exterior.

Los resultados muestran que variaciones en los precios internacionales de las exportaciones, o incluso únicamente de los productos de petróleo, y una salida masiva de capitales son choques (positivos y negativos) que tienen un gran potencial para afectar la economía y la pobreza.

Las disminuciones en los precios de las principales exportaciones tienen efectos negativos a nivel macroeconómico, con fuertes incrementos en términos de pobreza. De hecho, una caída de 50% en el precio de las exportaciones de hidrocarburos, minerales y alimentos procesados genera una subida notable de la pobreza. Tal como fue simulado, se trata de un choque externo extremo, pero que, justamente, está entre los más recurrentes en el caso de Bolivia. Los resultados sobre el producto son negativos: muestran

una caída del PIB de 13%, explicada principalmente por la contracción en la inversión. Asimismo, los resultados en términos de pobreza son por demás alarmantes, ya que, como consecuencia del choque simulado, se incrementaría la pobreza en aproximadamente cuatro puntos porcentuales.

Por su parte, se encontró que un incremento del 50% en el precio de los hidrocarburos, más bien, tiene efectos favorables, en la medida que Bolivia es un país productor de gas, de forma que los sectores exportadores de hidrocarburos ven incrementada su rentabilidad. En este caso, el producto se incrementa en un 5,9%, impulsado por el empuje de la inversión y por las interrelaciones que el sector de hidrocarburos tiene con otros sectores de la economía. Todo ello se traduce, además, en mejoras en los niveles de empleo y los ingresos laborales, resultando en aumentos en los ingresos de los hogares y, en consecuencia, la reducción de la pobreza.

Adicionalmente, se encontró que si la mitad de los flujos de capital saldría del país, se experimentaría uno de los choques externos más negativos. El producto caería en un 5% y la pobreza moderada afectaría a un 3% más de la población. Las simulaciones realizadas muestran, además, que una reducción de las remesas del exterior tendría efectos sumamente modestos.

Se examinaron diferentes políticas públicas de protección social para determinar qué tan efectivas podrían ser en atenuar los efectos negativos de los choques externos, principalmente en la pobreza. En este sentido, se identificaron como políticas efectivas las transferencias del Gobierno a los hogares y una reducción en las contribuciones a la seguridad social del patrono, una vez que esta sea compensada por transferencias del Gobierno a la seguridad social.

Para determinar la magnitud del cambio en las simulaciones, las transferencias del Gobierno a los hogares se asociaron con dos situaciones, usando cálculos basados en datos macroeconómicos: i) con la educación, una transferencia a los hogares de US\$ 25 por cada niña/niño en edad de asistir a la primaria, viviendo en situación de pobreza; y ii) con la vejez, una transferencia a los hogares pobres de US\$ 67 por miembro mayor a 65 años que no cotiza para ningún programa de seguridad social. Actualmente, se están aplicando similares políticas sociales en el país. De acuerdo con los resultados, la transferencia asociada con

la educación resulta más costosa que la otorgada a los adultos mayores, debido a que la población meta es mucho mayor; por lo tanto, impacta de mayor manera en el presupuesto fiscal, aspecto que debe ser considerado en su implementación, más aun cuando los recursos a ser transferidos provendrían de ingresos que están sujetos a la variación de precios internacionales, como es el caso del petróleo y el gas natural. Por el impacto fiscal, también habría una reducción del consumo del Gobierno, de tal manera que para no restarle recursos al Estado para la ejecución de obras en otros sectores sociales importantes, como la salud y los servicios de protección social, debería existir un esfuerzo presupuestario adicional para otorgar este beneficio. Entonces, para ejecutar una política de transferencias asociada a la educación, similar a la simulada, es importante, primero, evaluar el impacto de la misma y el grupo social beneficiado, respecto al grupo poblacional o sectores que serían menos favorecidos con su implementación. Y, asimismo, es importante contar con los recursos suficientes para el mantenimiento de la transferencia en el largo plazo, o considerar fuentes alternativas para su correspondiente implementación. En el caso de Bolivia, las transferencias a los hogares se financian con los recursos generados mediante la venta del gas; sin embargo, se trata de una fuente de ingresos que depende de la evolución del precio internacional.

Los niveles de inflación elevados registrados en 2007 y 2008, producto del incremento en el precio internacional de los alimentos, fueron determinantes para que en Bolivia se aplique una política de subsidio a estos productos. La evaluación del impacto de este tipo de política en la economía y en la pobreza ha demostrado que, si bien existe un beneficio elevado para la población mediante la restitución y la mejora de sus niveles de consumo, en términos fiscales, la medida resulta muy perjudicial. Se observa una drástica disminución de los ingresos estatales y, en consecuencia, una disminución del superávit fiscal y la imposibilidad de cumplir de manera eficaz con la prestación de los servicios públicos esenciales, como son la educación, la salud y la protección social.

Un mecanismo alternativo para contrarrestar la inflación, producto del incremento de los precios internacionales de alimentos, es la disminución de los aranceles a las importaciones de estos bienes, política también

implementada por el país para mantener el precio del pan, al establecer un arancel cero a la importación de trigo, maíz y harina. De acuerdo a los resultados de las simulaciones aquí analizadas, la aplicación de este tipo de política no tiene impactos significativos en las principales variables macroeconómicas, aspecto que es explicado por los bajos niveles arancelarios vigentes en el país para productos alimenticios. Esto permite mantener estable el comportamiento del consumo privado, sin generar un impacto fiscal importante.

### Referencias bibliográficas

- Ávila, L. y E. Bacha (1987). "Methodological note. On international monetary and financial issues for development countries". Ponencia presentada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), en Ginebra, Suiza.
- Balassa, B. (1981). "The newly-industrializing developing countries after the oil crisis". *Weltwirtschaftliches Archiv* Vol. 117 Issue 1: 142-192.
- Banco Mundial (2005). *Bolivia: poverty assessment. Establishment policies for pro-poor growth in Bolivia*. Washington DC: Banco Mundial.
- Barragán, J. y X. Coronado (1998). "La corriente de El Niño y sus impactos en la economía boliviana". *Documento de Trabajo Analítico*. UDAPE.
- Bastia, T. (2005). "Child trafficking or teenage migration? Bolivian migrants in Argentina". *International Migration* Vol. 43 Issue 4: 57-89.
- Canavire-Bacarreza, G. y M. Mariscal (2010). "Bolivia". Informe final de investigación elaborado para el proyecto Implicaciones de la Política Macroeconómica, los Choques Externos y los Sistemas de Protección Social en la Pobreza, la Desigualdad y la Vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, a cargo de la Oficina Subregional de la CEPAL en México y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Nueva York. Mimeo.
- CEPAL (2006). *Panorama social de América Latina*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas.

- FitzGerald y Salmat (1997). "External shocks and domestic adjustment in the 1970s and 1980s". En *External finance and adjustment: Failure and success in the developing world*, Karel Jansen y Rob Vos (Eds.): 63-89. Londres y Nueva York: Macmillan and St. Martin's Press.
- Jemio, L. C. (2006). *Efectos micro y macroeconómicos del Bonosol*. La Paz: Fundación Milenio.
- Jiménez, E. (2008). "Política Nacional de Empleo OIT - Programa de Apoyo al Trabajo Decente en Bolivia". Mimeo.
- Jiménez, W. y S. Lizárraga (2004). "Ingresos y desigualdad en el área rural de Bolivia". *Revista de Análisis Económico* N.º 19: 27-45.
- Landa, F. (2004). "¿Las dotaciones de la población ocupada son la única fuente que explica la desigualdad de ingreso en Bolivia? Una aplicación de las microsimulaciones". *Revista de Análisis Económico* N.º 19: 71-99.
- (2005). "Armonización de las funciones esenciales de la salud pública (FESP) con la clasificación funcional del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas". *Documento de Trabajo* N.º 05/03.
- Loza, G. (2007). "Diseño de la red integral de protección social en Bolivia". *Revista de Análisis Económico* N.º 22: 164-196.
- OIT (2002). "El trabajo decente y la economía informal". Informe de la 90ª Reunión 2002, en Ginebra, Suiza.
- Requena, B., E. Antelo, C. Crespo, E. Cupe y R. Ramirez (2000). "Determinants of bank spreads in Bolivia". En *Why so high? Understanding interest rate spreads in Latin America*, P. Brock y L. Rojas-Suarez. Washington DC: Inter-American Development Bank.
- Rodríguez, F. y V. Caro (2007). *Economic growth and macroeconomic policies in Bolivia*. Massachusetts: Harvard University.
- UDAPE (2005). *Informe económico y social. Perspectivas 2005*. La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
- (2006). *Informe económico y social 2005. Perspectivas 2006*. La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
- (2007). *Informe especial. La informalidad en el mercado laboral urbano 1996-2006*. La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
- (2008). *Dossier de estadísticas sociales y económicas Vol 18*. La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.

Yáñez, E. (2004). “Qué explica la desigualdad en la distribución del ingreso en las áreas urbanas de Bolivia: un análisis a partir de un modelo de microsimulación”. *Revista de Análisis Económico* N.º 19: 46-70.